



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

Trabajo Fin de Grado

**RECONSTRUCCIÓN NACIONAL A TRAVÉS DE LAS  
COMISIONES DE LA VERDAD: JUSTICIA  
TRANSICIONAL EN PAÍSES DE POST-CONFLICTO**

TUTORA: SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA

AUTORA: URBE SECADES GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA

JULIO 2013

## ÍNDICE

### PRIMERA PARTE: REVISIÓN DE LA LITERATURA

- Objeto y Justificación.....pág. 2
- Introducción.....pág. 3
- ¿Qué son las Comisiones de la Verdad?.....pág. 4
- Verdad.....pág. 8
- Justicia Transicional.....pág. 9
  - Justicia criminal
  - Justicia Restaurativa
- Reparación y Reconciliación.....pág. 12
- Poder.....pág. 14

### SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

- Introducción.....pág. 17
- Desarrollo social
  - Memoria Colectiva.....pág. 18
  - Identidad.....pág. 21
  - Educación.....pág. 23
  - Necesidades de las víctimas.....pág. 24
- Desarrollo político
  - Consolidación de la Paz.....pág. 25
  - Independencia y Transparencia.....pág. 26
  - Medios de comunicación.....pág. 27
  - Liderazgo.....pág. 28
- Desarrollo económico.....pág. 29
- Conclusión.....pág. 31

BIBLIOGRAFÍA.....pág. 33

ANEXO.....pág. 39

## **PRIMERA PARTE: REVISIÓN DE LA LITERATURA**

### **OBJETO Y JUSTIFICACIÓN**

La sociología es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, instituciones y organización de las sociedades. En otras palabras, estudia la “lógica” de una sociedad. Así, cuando la “lógica” de una sociedad se rompe y resulta drásticamente transformada debido a una guerra, los sociólogos, junto con otros expertos, tienen el deber de estudiar los casos, las razones y factores que llevaron al conflicto armado. De hecho, la sociología resulta especialmente útil ya que contribuye a interpretar la estructura social como un entramado de relaciones entre actores que tienen que ceder mutuamente poder para dotarse de reglas democráticas. La ausencia de estructura social necesita ser teóricamente analizada, comprendida y redefinida para que, posteriormente, ello pueda ser aplicado a políticas sociales que ayuden a sociedades en post-conflicto a volver a una realidad estable y sin violencia. Este documento pretende clarificar y resumir las complejidades teóricas y prácticas que rodean a las sociedades de post-conflicto en las cuales se haya llevado a cabo una Comisión de la Verdad para atender las atrocidades del pasado. También se señalan aspectos claves que pueden ayudar a reconstruir una nación devastada.

El creciente número de Comisiones de la Verdad desde los años ochenta del siglo pasado, ha atraído la atención de los académicos. Hay toda una extensa literatura sobre temas como justicia transicional, Comisiones de la Verdad y juicios, procesos de democratización, reconciliación, víctimas y agresores etc. Sin embargo, la literatura tiende a enfocarse en los mismos temas relacionados con los efectos ambiguos de la verdad, la moralidad, reconciliación, consecuencias psicológicas de los conflictos armados, justicia, liderazgo y poder político. Éstos son los temas más recurridos y comunes.

Este documento menciona la importancia de considerar todos esos aspectos y las teorías relacionadas con ellos (con sus puntos fuertes y débiles) para el análisis. Además, se exploran las contradicciones y la ambigüedad presente en los contextos de transición donde se ha llevado a cabo una Comisión de la Verdad. Sin embargo, el objetivo de este escrito no es hacer una revisión sistematizada de los argumentos más comunes en la literatura disponible hoy en día. El objetivo es subrayar los aspectos que

se deben tener en cuenta y que deben ser cuidadosamente tratados para potenciar la posibilidad de una transición exitosa a través de las Comisiones de la Verdad hacia una reconstrucción nacional basada en la democracia y una paz duradera y estable. Reconozco que las Comisiones tienen sus limitaciones pero por encima de ello, creo que son mecanismos adecuados para tratar con los crímenes pasados, fomentar un futuro pacífico común y reconstruir una nación rota. Así, aspectos como la memoria colectiva, la identidad, mediación y negociación, transparencia y los medios de comunicación son clave para que las Comisiones de la Verdad tengan un impacto real y sean exitosas.

## INTRODUCCIÓN

Hay numerosos países cuya población ha experimentado violaciones masivas contra los derechos humanos debido a un conflicto intraestatal entre fuerzas políticas donde están implicados el Estado, diferentes grupos armados y la población civil. Las últimas décadas del siglo XX fueron particularmente sangrientas con numerosos casos en varios continentes: América Central y del Sur (Guatemala, El Salvador, Perú y Chile entre otros muchos), África (Ruanda, Sierra Leona y Sudáfrica entre otros tantos) y Asia (Camboya, Sri Lanka y Timor Oriental). Cada conflicto se originó por razones específicas, implicando a diferentes actores y desarrollándose de forma diferente. Sin embargo, todos comparten el hecho de que víctimas y agresores implicados en la violencia intensa, están generalmente dispuestos a dejar el conflicto atrás y comenzar la transición hacia una democracia estable. La cultura del “Nunca Más” se ha ido extendiendo por todo el mundo desde 1980 cuando las primeras Comisiones de la Verdad se crearon para tratar los crímenes perpetrados contra la población civil.

Hay muchos ejemplos de transiciones democráticas tras un conflicto interno nacional, y la idea de justicia es el centro de tal proceso. Sin embargo, hay numerosas formas de entender la justicia. En este documento se presta especial atención al concepto de justicia transicional y no tanto a otras formas como justicia retributiva, restaurativa o distributiva. La justicia transicional está basada en la verdad, justicia y reparación y contribuye al proceso gradual de cambio de un régimen violento y autoritario a un nuevo gobierno pacífico. De hecho, el enfoque se centra más concretamente en las Comisiones de la Verdad como mecanismos transicionales

válidos. El principal argumento aquí dado es que las Comisiones de la Verdad, a través de la participación y la cooperación, ayudan a conseguir una verdad global sobre un pasado cruel. La verdad es el primer paso para una democracia estable y una posible reconciliación nacional que potencie el objetivo último de paz duradera. Este proceso incluye varios actores cuya conexión con diferentes factores afecta al éxito o fracaso de la transición.

Este trabajo está dividido en dos secciones. La primera sección es una revisión de la literatura principal sobre aspectos importantes respecto al debate que aquí se plantea: Comisiones de la Verdad, verdad, justicia, reparación y reconciliación y poder político. En la segunda parte, subrayaré los aspectos que deben tenerse en cuenta para fomentar la paz duradera. Entre estos aspectos se encuentran la memoria colectiva, la identidad, las necesidades de las víctimas, la educación y el desarrollo social, político y económico. La conclusión final destaca la información más relevante del documento.

### **¿QUÉ SON LAS COMISIONES DE LA VERDAD?**

La lógica de las Comisiones de la Verdad es que lo inexplicable debe entenderse y se basan en formas de expresión como “avanzar” y “llegar a un acuerdo común”. Las Comisiones de la Verdad son “cuerpos de búsqueda de hechos, oficiales, temporales y no judiciales que investigan una serie de abusos contra los derechos humanos o la ley humanitaria generalmente cometidos a lo largo de varios años” (Orentlicher 2005:6). Estos cuerpos están basados en la independencia, imparcialidad y competencia. Generalmente se crean a través del presidente del país, quien nombra a los comisarios y dicta el mandato de la comisión, consultando únicamente a un grupo cercano de asesores. Sin embargo, hay casos en los que estos cuerpos se establecen por una legislatura nacional como en Sudáfrica; o a través a acuerdos de paz como en El Salvador o Guatemala, donde la comunidad internacional tiene un papel más destacado.

Las razones de crear una Comisión de la Verdad difieren según los países pero las más comunes son: a) la reconciliación nacional y la necesidad de tratar con las heridas abiertas del pasado; b) facilitar posibles condenas tras el informe final de la Comisión; y c) la intención de distanciar las políticas del nuevo gobierno del antiguo régimen, subrayando una nueva era de dignidad y respeto de los derechos humanos

(Hayner 2001). Siguiendo la clasificación que propone Hayner (2001), se destacan también cinco objetivos:

- Descubrir, clarificar y reconocer formalmente los abusos del pasado. Éste es el objetivo más importante ya que reduce la posibilidad de mentiras y la negación de verdades conocidas pero silenciadas.
- Atender las necesidades específicas de las víctimas. Las Comisiones de la Verdad se enfocan en las víctimas dándoles una voz que ayuda a diseñar los programas de reparación necesarios para aquellos afectados por el conflicto.
- Contribuir a la justicia y responsabilidad. Al identificar a los agresores, las Comisiones contribuyen a las condenas y sanciones legales y morales.
- Contribuir a la responsabilidad institucional y recomendar reformas. Tienen el posicionamiento adecuado para dar recomendaciones pero el impacto de tales reformas depende del interés y voluntad política de los que sustentan el poder.
- Fomentar la reconciliación y reducir el conflicto sobre el pasado. La reconciliación no figura entre los objetivos principales de las Comisiones pero éstas pueden ayudar a resolver desacuerdos y reducir las tensiones. Sin embargo, a veces el conocimiento de la verdad incrementa las tensiones. Este efecto ambiguo será comentado posteriormente.

El éxito o fracaso de las Comisiones depende en gran medida de cómo sean dirigidas. Así, una dirección débil, divisiones en el personal, falta de recursos o una financiación escasa pueden crear serios problemas. De hecho, uno de los problemas básicos es la adecuada distribución de recursos, como una financiación transparente y suficiente material y recursos humanos que aseguren la independencia y claridad de la Comisión (Orentlicher 2005). El personal está formado por numerosos expertos entre los que se incluyen abogados, investigadores, activistas, trabajadores sociales, psicólogos, especialistas informáticos, intérpretes y personal de seguridad. La mayoría suelen ser ciudadanos nacionales de país y el rol de la comunidad internacional varía según los casos. Generalmente, el personal es mixto con internacionales y nacionales trabajando conjuntamente como en Guatemala, Chile o Haití; pero hay otros ejemplos donde los comisarios eran todo internacionales como en El Salvador, o todo nacionales como en Sudáfrica (Popkin 2000). Levinson afirma que las Comisiones de la Verdad deberían incluir siempre personal nacional porque “la situación a investigar se considera

demasiado compleja para extranjeros o porque las personas domésticas cualificadas son suficientes” (2000:20).

Las víctimas son el centro de todo el proceso. En la Declaración de Justicia para las Víctimas de 1985, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) definió las víctimas en un sentido amplio como “personas quienes, individual o colectivamente, han sufrido daño, incluyendo perjuicios físicos o mentales, sufrimiento emocional, pérdida económica o perjuicio sustancial de sus derechos fundamentales, a través de actos y omisiones que son violaciones de leyes nacionales o normas internacionalmente reconocidas relacionadas con los derechos humanos” (UN ODCCP 1999:4). A pesar de esta definición general, los contextos específicos afectan a la definición de víctima y perpetrador porque estos conflictos multidimensionales no son verticales sino horizontales: las víctimas también han podido ser criminales y viceversa. Así, la definición de víctima es confusa y hace que sea difícil buscar responsabilidad, castigo y reparación (Rettberg 2005).

Los testimonios pueden hacerse privada o públicamente. Algunos ponentes prefieren hablar en privado por seguridad ya que temen sufrir consecuencias por testificar. Otros, prefieren en público para que sean escuchados y reconocer su sufrimiento públicamente. El aspecto positivo de que sean en público es que ayuda a la transformación de la Comisión de un producto (el informe final) a un proceso, atrayendo al público como audiencia y animando a la cobertura mediática ya que el público puede ser más escéptico si los testimonios se hacen a puerta cerrada (Levinson 2000). A veces, las entrevistas se tienen que hacer en privado por razones de seguridad o intimidad. Sin embargo, las sesiones privadas no ayudan a la imagen de transparencia que las Comisiones promueven. Independientemente del método aplicado, es indudable que la participación de la población civil es crucial para el éxito de la Comisión de la Verdad. Además de todas las dificultades internas de las Comisiones, también obstaculizan el proceso transicional factores externos como el acceso a documentación escrita del gobierno y fuerzas armadas (y, a veces, gobiernos extranjeros), la disposición de los agresores de cooperar o las amenazas de violencia a las víctimas que testifican y el personal de la Comisión (Levinson 2000).

El éxito de las Comisiones de la Verdad es particularmente difícil de evaluar. Hayner (2001) considera tres categorías: a) como un proceso que anima al público a

entender el silencio, lo cual requiere la participación del mayor número de actores posible y que se supone es positivo y apoya a las víctimas y supervivientes; b) como un producto, en referencia a la extensión de la verdad revelada en el informe final; y c) como un impacto, con respecto a la contribución del trabajo de la Comisión a la reconciliación duradera y la implementación de las reformas y recomendaciones. De hecho, el mejor comprobante de éxito es ver si el conflicto ha resurgido y si hay una consolidación institucional (Rettberg 2005). Otros autores tienen una visión más relativa sobre el éxito, afirmando que el éxito de cada Comisión de la Verdad debe ser juzgada en sus propios términos. Subrayan la gran variedad de estructuras y poderes de cada Comisión, las particularidades de cada ambiente en las que operan y la distinta naturaleza de los crímenes que investigan (Brahm 2007).

Desde una perspectiva cualitativa, las Comisiones de la Verdad tienen efectos ambiguos. Ofrecen una plataforma donde las víctimas pueden compartir sus historias, donde tienen una voz y un reconocimiento. Algunas víctimas se sienten liberadas hablando de su experiencia personal. Sin embargo, también existe el peligro de la re-traumatización al testificar. Debido a esto, las Comisiones de la Verdad se consideran positivas a nivel social (en cohesión social) pero más negativas a nivel individual (porque no atienden todas las necesidades psicológicas de los supervivientes). Además, hay evidencia empírica que muestra los beneficios a nivel macro-social de la justicia transicional al establecer un ambiente más respetuoso con los derechos humanos. Esta evidencia empírica proviene del estudio realizado por Sikkink y Booth Walling (2007), quienes compararon la situación de los derechos humanos antes y después de los procesos transicionales en varios países. Concluyeron que los tribunales y las comisiones mejoraron la situación política en dieciséis países mientras que en aquellos países donde sólo hubo juicios o donde no hubo ni juicios ni comisiones, la situación política se mantuvo igual o incluso empeoró (Sikkink y Booth-Walling 2007). Esto se puede observar en las tablas 1,2,3 y 4 del anexo.

En general, las Comisiones de la Verdad suelen decepcionar porque las expectativas puestas en ellas siempre son mayores de lo que pueden conseguir en su corto período de existencia (desde seis meses hasta tres años). Tratan con miles de víctimas, instituciones débiles y la negativa de algunos criminales de mostrar arrepentimiento o perdón. Consecuentemente, la decepción suele oscurecer las significantes contribuciones que las Comisiones llegan a conseguir. Pero “si se hace



bien, las Comisiones de la Verdad deberían esperar transformar la historia de daño silenciado y conflicto a un punto de entendimiento y reconocimiento, para que el futuro no esté continuamente obstaculizado por un pasado inconcluso” (Hayner 2011:254).

## LA VERDAD

*“No se puede perdonar lo que se desconoce”*

Arzobispo Tutu

El descubrimiento de la verdad es la tarea principal de las Comisiones de la Verdad pero ¿cuánta verdad deben revelar? Este proceso resulta especialmente difícil y tiene efectos ambiguos. Algunos creen que es necesario para la reconciliación y otros consideran que no merece la pena arriesgar a que se revivan recuerdos del conflicto.

El derecho a conocer la verdad sobre hechos del pasado relacionados con crímenes y las circunstancias que llevaron a violaciones sistemáticas, es un derecho inalienable que no debería ser negado a nadie. Como afirma Orentlicher, “independientemente de cualquier proceso legal, las víctimas y sus familias tienen el absoluto derecho a saber la verdad sobre las circunstancias en las que las violaciones sucedieron y, en el caso de muerte o desaparición, el ‘destino’ de la víctima” (2005:7). Además, saber qué sucedió y cómo sucedió proporciona un seguro vital contra la reaparición de las violaciones (Orentlicher 2005), si no, las sociedades están condenadas a repetir el horror. Asimismo, sin una idea de la identidad de los agresores y la naturaleza de su implicación, no será posible aplicar sanciones apropiadas.

El argumento opuesto asegura que la verdad es demasiado dolorosa y que revive recuerdos que podrían consecuentemente revivir el conflicto. Así, olvidar se considera una mejor opción. Aquellos a favor de esta posición afirman que cada uno tiene su propia verdad válida, de forma que ¿por qué se debe imponer una “verdad oficial”? Y ¿qué tipo de verdad está siendo revelada? Debido a que la extensión de los crímenes es tan amplia, variada y ha afectado a tantas personas, las Comisiones no tienen los suficientes recursos (tiempo, dinero ni personal) para investigarlo todo, entonces tienen que investigar un número representativo de casos. La verdad que se investiga se acuerda en el mandato de la Comisión y está determinada por las prioridades del liderazgo. Así, si el mandato es limitado, también lo será la verdad omitiendo, inevitablemente, parte de la información.

En general, el descubrimiento de la verdad está considerado como un proceso más curativo que perjudicial. Como Bhargava (2000) asegura, olvidar permite la reaparición de actos perjudiciales porque por un lado, refuerza la pérdida de autoestima y desmoralización de las víctimas y, por otro, los agresores refuerzan su confianza al resultar impunes ante los asesinatos. Olvidar demasiado rápido o sin reparación, encierra a una sociedad en su pasado. Así, “cierto olvido en el momento adecuado es necesario pero un conocimiento general sobre los actos viles nunca debe extraerse de la memoria colectiva” (Bhargava 2000:54).

## **JUSTICIA TRANSICIONAL**

El descubrimiento de la verdad es importante en la justicia transicional pero ¿es toda la verdad una forma de justicia? La justicia se sitúa en el centro de las Comisiones de la Verdad pero es un concepto que puede entenderse de diferentes modos. La justicia retributiva se refiere a los juicios, condenas y demás castigos legales en consecuencia por el daño causado. La justicia distributiva, también denominada justicia social, se relaciona con la distribución de recursos y la justicia dentro de lo que la gente consigue (reconocimiento, bienes básicos, dinero etc.). La justicia restaurativa se enfoca en las necesidades de las víctimas y sus tres pilares son los daños y las necesidades, obligaciones y compromiso (Zehr 2002).

Las Comisiones de la Verdad se comprometen de lleno con el concepto de justicia transicional basado en la verdad, justicia y reparación y contribuye al proceso gradual de cambio de un régimen violento y autoritario a un nuevo gobierno pacífico. La justicia transicional se extiende desde la justicia retributiva hasta la restaurativa en forma de juicios y reparaciones que tienen lugar en la transición de un régimen político a otro (Elster 2004). Pretende clarificar la identidad y el destino de las víctimas y de los agresores. También ayuda a diseñar las formas en las que una sociedad tratará con los crímenes del pasado y la necesaria reparación dependiendo de la naturaleza del conflicto, las condiciones específicas del proceso de transición per se y el escenario internacional en el que sucede (Rettberg 2005).

### **Justicia Criminal**

Por lo general, la justicia está ligada a la idea de castigo. En el mundo Occidental, el actual modelo de responsabilidad legalizada e individualizada está basado en dos suposiciones: a) “la responsabilidad de los crímenes de guerra es una característica de los individuos (...) en vez de los estados o grupos sociales o étnicos a los que pertenecen; y b) los tribunales son las instituciones más apropiadas para tratar la responsabilidad porque otros métodos no pueden ofrecer suficiente protección al inocente ni castigar al culpable” (Ainley 2011:410). Así, “se valora particularmente responsabilizar a individuos porque se supone que ello rompe los ciclos de la violencia al culpabilizar aisladamente a ciertos agresores en vez de grupos enteros” (Ainley 2011:413).

Este método retributivo ha demostrado ser insuficiente cuando se trata de violaciones masivas de derechos humanos y de la creación de una nueva nación a través de una sociedad justa. Hay varias razones que justifican la insuficiencia de los tribunales en estos casos. Primero, en la mayoría de los países donde han ocurrido las atrocidades, el sistema judicial es disfuncional y altamente corrupto. Segundo, el gobierno nunca tendría los suficientes recursos para procesar a todas las personas implicadas en los crímenes. Sería un proceso muy costoso en tiempo y dinero que sólo conseguiría procesar a un pequeño porcentaje del total de criminales. Tercero, la mayoría de las víctimas son pobres y no pueden permitirse un abogado, y el número de víctimas es demasiado grande como para que ninguna institución les proporcione el servicio. Cuarto, muchos asesinatos políticos eran legales en los términos de las leyes nacionales. Quinto, son principalmente las personas más poderosas las que tienen los recursos suficientes para escapar y evitar las condenas (pueden exiliarse del país, por ejemplo), de forma que la justicia sólo afectaría a los agresores de menor importancia que estaban subordinados a órdenes superiores. Por último, las condenas se centran en el criminal y en el crimen pero no en la víctima o las razones del crimen, así que no atiende a la dignidad humana individual. Los juicios no dan la oportunidad al arrepentimiento o el perdón ni proporcionan medidas para la reparación ni rehabilitación nacionales. Consecuentemente, no ayudan a reconstruir una nación.

Como afirma Zyl “los sistemas de justicia criminal están diseñados para sociedades donde la violación de la ley es la excepción y no la norma. Una vez que la violación de la ley es la norma, estos sistemas sencillamente se desbordan” (1999:661). En este sentido, los argumentos expuestos anteriormente no deberían malinterpretarse.

No se está diciendo que la justicia criminal sea la manera errónea de tratar las violaciones de los derechos humanos. Ello es necesario y vital para prevenir su repetición pero no debería considerarse como la única forma de hacer justicia. Cuando la justicia es improbable en los tribunales, las comisiones juegan un papel importante en la recomendación de sanciones no-judiciales contra los nombrados, como por ejemplo prohibiéndoles de cargos públicos, de la posesión de armas o con vergüenza pública (Hayner 2001).

### **Justicia Restaurativa**

Las Comisiones de la Verdad se enfocan en la justicia restaurativa que está centrada en la víctima/superviviente. La justicia se consigue a través de la responsabilidad y la reparación social, no la retribución. Por un lado, este método ha sido elogiado por ser “moral, cultural, psicológico y humano en vez de puramente instrumental o legal” (Kiss 2000:80). Como comenta Rotberg, “la justicia transicional incluye la verdad y la justicia que juntas crean una alternativa coherente a la justicia retributiva” (2000:11). Por otro lado, hay dos grandes objeciones: primero, el perdón y la amnistía son incompatibles con la actual ley internacional de forma que de ser implementados en un contexto de transición, atraería la atención de la Corte Penal Internacional (ICC) y podría abrir investigaciones y procesar agresores ya que tiene la competencia para hacerlo. Segundo, la amnistía limita los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado en la defensa de los derechos humanos, lo cual es contraproducente para la posibilidad de perdón y reconciliación (Uprimmy y Saffon 2005). Ésta es una de las paradojas de las Comisiones de la Verdad, como reconoce Zyl (1999): aspiran a ser la base para el establecimiento de Estado de Derecho pero normalmente se crean en contextos de amnistías las cuales representa la quiebra fundamental del Estado de Derecho.

Los procesos de transición no son independientes del contexto político, social y económico en los que se dan y con los que tienen que tratar. Así, los cambios políticos y sociales requieren negociación y acuerdos políticos entre los diferentes actores implicados (Morales 2011). Sin embargo, para que los agresores consigan un acuerdo, necesitan incentivos como la amnistía o impunidad. Estos procesos son especialmente frágiles y por ello se crean previamente condiciones especiales que aseguren los objetivos y la estabilidad en el tiempo. El gran reto de la justicia transicional es

encontrar una solución política viable que, sin amnistía, consiga la paz y reconciliación. De hecho, siempre hay mucha tensión entre las fuerzas opuestas de los imperativos de castigos judiciales internacionales y los requisitos prácticos de las amnistías típicas de los contextos transicionales (Uprimmy y Saffon 2006). Se reconoce, sin embargo, que hay elementos retributivos en la justicia transicional para los cargos principales de amplias matanzas. Como Uprimmy y Saffon (2005) afirman, la justicia retributiva complementa la transicional en contextos de post-conflicto pero nunca debe sustituirla.

Algunos autores como Marta Minow (2000) piensan que una sociedad no puede perdonar lo que no puede castigar. Otros reflexionan que la justicia es sacrificada con razón en aras de la justicia moral: para una futura reconciliación y armonía social duraderas. En este sentido, Boraine (2000) argumenta que las sociedades profundamente divididas en las que las Comisiones de la Verdad operan, no pueden depender del castigo para curar y reconciliar sus diferentes comunidades. Entonces, la unidad nacional proviene de la comprensión, no de la venganza, de la reparación pero no represalias y del humanitarismo y no la victimización.

En general, ambos planteamientos de la justicia tienen sus debilidades y fortalezas pero no son mutuamente excluyentes. El esquema “justicia o verdad” debe evitarse porque las Comisiones de la Verdad suelen contribuir directamente a los procesos judiciales al identificar agresores y crímenes. Como alega David A. Croker, “tribunales y comisiones tienen roles suplementarios para conseguir los múltiples objetivos de la justicia transicional” (2000:104). Así, los sistemas híbridos (una mezcla de juicios, amnistías y comisiones) serían más eficientes en erradicar los abusos de los derechos humanos (Ainley 2011). De hecho, hay estudios que muestran los beneficios de los rituales transicionales tanto desde la perspectiva cualitativa (efectos sociales en las víctimas y la nación) como de la cuantitativa (repetición de violaciones).

## **REPARACIÓN Y RECONCILIACIÓN**

La reconciliación es uno de los objetivos más difíciles de lograr. Es un proceso lento, delicado y difícil. Kriesberg lo define como “el proceso de desarrollar un consenso conciliador entre las personas o grupos antagonistas. Se refiere a una relación relativamente amistosa, establecida después de la ruptura de la relación por la

implicación de daño extremo de una o ambas partes” (1998:184). No hay una fórmula específica para la reconciliación ya que incluso entre aquellos que han sufrido, no suele haber un consenso sobre los requisitos para fomentar la cura y la unidad (Zyl 1999). Los expertos suelen coincidir en el rol crucial de los agresores para el proceso de reconciliación. Éstos tienen gran parte del poder en los procesos de transición ya que su perdón, reconocimiento de los actos y arrepentimiento es la condición necesaria para que la reparación y reconciliación puedan tener lugar (Hamber 2007).

La reconciliación incluye una serie de procesos micro y macro como el “desarrollo de una visión común de una sociedad justa e interdependiente; reconocer y tratar con el pasado; creación de relaciones positivas; cambio significativo cultural y de actitudes; y cambio sustancial social, económico y político” (Hamber y Kelly 2005:18). Huyse (2003) afirma que hay tres pasos para la reconciliación: sustituir el miedo por una coexistencia no violenta; crear confianza y seguridad; y fomentar la empatía la cual necesita ser acompañada de la creación de democracia y un nuevo orden socioeconómico. Hayner (2001) menciona también cinco factores que impulsan la reconciliación: el cese de la violencia o de la amenaza de violencia; reconocimiento de una visión compartida de la historia que vaya más allá de las generalidades o justificaciones implementadas; fomentar el desarrollo y los programas de reconstrucción; tiempo; atender las desigualdades estructurales y las necesidades materiales ya que como afirma Mamdani (1996), el beneficio de la justicia debe ser social.

A pesar de estos diferentes intentos de definir reconciliación y sus posibles etapas, no se puede considerar una noción absoluta. No es un concepto universal porque está completamente definido por el contexto. Charles Lerche lo subraya asegurando que “el contexto político tiene inevitablemente un impacto en la práctica y las consecuencias del proceso de verdad y, por consecuencia, en su contribución a la reconciliación” (2000: 7). La misma idea la comparte Mahmood Mamdani quien afirma que “la reconciliación puede ser imperativo moral, pero no tendrá lugar al menos que evolucione también como una posibilidad política” (1996:5). Esto es visible en las diferentes experiencias de las Comisiones de la Verdad en el mundo. Por ejemplo, en Sudáfrica la reconciliación se promovió fuertemente pero nunca se ha considerado una posibilidad viable en Argentina.

A pesar de que la reconciliación no sea uno de los objetivos principales de las Comisiones de la Verdad, se espera de éstas que lideren el camino hacia la reparación. La pregunta es, ¿reconciliación nacional o individual? Las Comisiones sólo pueden potenciar la reconciliación nacional, la cual no tiene por qué llevar a la reconciliación individual. Esta última es un proceso profundamente personal tan diverso como las experiencias de las víctimas. Sin embargo, se puede conseguir un paso más: al aclarar el pasado con una verdad global, los mitos y mentiras dejarán de obstruir los debates entre los partidos opuestos para poder gobernar juntos (Hayner 2001).

Conceptos como la reconciliación o el perdón que eran considerados originalmente procesos individuales, han ido ganado uso político y son centrales en los procesos de transición. Debe aclararse que la reconciliación no implica el perdón como prerequisite (Hamber 2007) aunque estén estrechamente relacionados. Una de las razones es porque los políticos pueden usar fácilmente el perdón para ocultar la verdad sobre el pasado imponiendo una “mentalidad de olvido y perdón” que no ayuda a la reconciliación real. Esto es lo que Ignatieff (1996) denominó “falsa reconciliación”.

## **PODER**

Todos los actores están directamente afectados por las dinámicas de poder al igual que las Comisiones de la Verdad que no son independientes de las restricciones de la política doméstica. De hecho, Brahm (2007) habla sobre la dificultad de separar las Comisiones del ambiente político en el que se establecen. Aunque estos cuerpos sean totalmente independientes, algunos autores consideran que una de sus grandes limitaciones es el contexto político que restringe sus acciones: desde el nacimiento de las Comisiones y la verdad que se investiga hasta la publicación del informe final. Por ejemplo, Brahm (2004) asegura que las Comisiones sólo se consideran cuando hay una necesidad de compromiso porque los partidos enfrentados tienen cierta autoridad o porque el nuevo gobierno está forzado a tratar con el régimen pasado que aún tiene influencia. Así, es raro que se considere una investigación de gobierno si el conflicto finaliza sin una transición política clara o fuerte. Brody (2001) también afirma que las Comisiones de la Verdad están siendo cada vez más vistas por gobiernos abusivos como la opción suave para evitar justicia. Para la comunidad internacional también son

atractivas ya que representan la solución “para sentirse bien” y de bajo coste ante un estado de transición confuso.

El establecimiento de las Comisiones de la Verdad tiene lugar cuando hay un balance de poderes, es decir, cuando la fuerza relativa de las demandas en conflicto es más o menos igual (Skaar 1999). Éste fue el caso de El Salvador donde la guerra enfrentó al Estado con sus propios militares y paramilitares y el grupo insurgente Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Los Estados Unidos estaban profundamente implicados en el conflicto ayudando al gobierno Salvador con cobertura militar de hasta 1.1\$ billones y ayuda económica de hasta 3.15\$ billones entre 1980 y 1991 (Zhu 2008). Así, ambas partes tenían por igual las consecuencias de los tribunales y acogieron la idea de una Comisión de la Verdad. El detalle que se consiguió en el informe final fue sorprendente pero se contrarrestó con la amplia amnistía pasada a los cinco días de la publicación del informe. Además, son pocas las recomendaciones que se han llevado a cabo desde entonces.

La Comisión de la Verdad en Guatemala tuvo lugar en un contexto similar ya que fue el resultado de una triple lucha por el poder entre el gobierno, los militares y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). También trataban de evitar las condenas debido a la historia de extrema violencia en los treinta y seis años de conflicto interno. De hecho, “la comisión podía intentar buscar alguna responsabilidad social pero se prohibió nombrar a ningún perpetrador individual, evitando cualquier posibilidad de responsabilidad punitiva” (Zhu 2008:14). Esto muestra la realidad sobre cómo la verdad se encuadra y limita al mandato de la Comisión, establecido por las autoridades.

El caso de Perú es también el resultado de un intrincado balance de los poderes implicados: el gobierno de Fujimori y el grupo guerrillero Sendero Luminoso. Cuando Fujimori salió del poder, el gobierno de Paniagua convocó la Comisión de la Verdad con un mandato para investigar la implicación de ambas partes en el conflicto. La Comisión se llevó a cabo porque algunos de los agresores seguían en cargos de poder y tenían las condenas legales. Sin embargo, las élites sociales y militares no pudieron hacer frente a las acusaciones reflejadas en el informe final y sufrieron amenazas de condena ya que la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos no permitieron la opción de la impunidad.



En Estados recién formados, provenientes de transiciones, tienen una probabilidad baja de que se cree una Comisión de la Verdad debido a su falta de experiencia, influencia y debilidad (Zhu 2008). Éste fue el caso de Timor Oriental donde la Comisión creada fue un acto legal de la ONU y aceptado debido al temor de un posible tribunal internacional. El mandato lo determinó la Unidad de Derechos Humanos de UNTAET, la cual no permitió la opción de amnistía o de no investigación.

Cabe señalar que, en los casos aquí mencionados, las Comisiones de la Verdad siempre han surgido como la última opción y donde el compromiso era necesario para que la justicia transicional funcionase. Consecuentemente, Zhu sugiere que “las opciones disponibles de un Estado tras una guerra civil están limitadas por las dinámicas del poder doméstico” (2008:26) y las Comisiones están entre las últimas opciones ideales para los negociadores estatales y rebeldes. Debe entenderse primero qué podría funcionar y después observar qué funciona mejor para un país en particular con circunstancias particulares.

## **SEGUNDA PARTE: ASPECTOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN NACIONAL**

### **INTRODUCCIÓN**

A pesar de todos los debates y las discusiones teóricas sobre la efectividad de las Comisiones de la Verdad y de las diferentes perspectivas en los temas mencionados, creo que estos cuerpos pueden ir más allá de la mera publicación de un informe final, siendo éstos cruciales. La reparación es la única forma de que una sociedad vuelva a una realidad sin violencia y aunque sea una tarea difícil, puede conseguirse a través de varios mecanismos. Esto no quiere negar el hecho de que los conflictos surgen por una amplia variedad de factores que interactúan diferentemente en distintos escenarios incluyendo: inhabilidad de realizar funciones estatales, prácticas estatales excluyentes, gobernanza arbitraria o dificultades externas entre otros (Lockhart y Vincent 2013).

Como reconocen Lockhart y Vincent (2013), hay diferentes modos de categorizar los conflictos por su naturaleza: países donde surgen movimientos separatistas con estados multiétnicos (como en Yugoslavia y Etiopía), países que sufren un conflicto persistente (República Democrática del Congo o Somalia), y represión estatal que pretende frenar movimientos disidentes (El Salvador, Guatemala o Sudán). También es importante distinguir entre los factores que pueden crear conflicto y factores que contribuyen a sostener el conflicto. Las tipologías resultan complicadas ya que los conflictos son fenómenos multidimensionales. Así, cada país se enfrenta a diferentes retos, lo cual requiere métodos específicos para cada contexto que tengan en cuenta “la historia, el contexto y las aspiraciones de los ciudadanos de cualquier sociedad que quiera superar su pasado” (Lockhart y Vincent 2013:44).

Los conflictos armados contemporáneos son extremadamente complejos por lo que la estrategia de paz debe ser multidimensional. Debe comenzarse por la concienciación de que el acuerdo de paz no crea paz per se sino únicamente una serie de oportunidades que se pueden aprovechar o desechar (Rothstein 1999). De hecho, como afirma Amnistía Internacional, “aunque haya diferentes formas de responsabilizar, hay únicamente un tipo de justicia: aquella basada en el respeto, la protección y la

promoción de los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y reparaciones completas” (Amnesty International 2010:31).

La transición de la guerra a la paz implica procesos complejos “marcados por la necesidad de establecer una seguridad básica (incluyendo el desarme y desmovilización), proteger a las víctimas de guerra más vulnerables, reintegrar a las poblaciones desplazadas, rehabilitar la infraestructura básica y los activos productivos, estabilizar la economía, promover un gobierno responsable y transparente, restablecer el capital social y fortalecer la sociedad civil” (The World Bank 1997:iii). A pesar de todas las particularidades de cada sociedad de post-conflicto, señalaré una serie de aspectos a considerar en futuros procesos de transición a través de las Comisiones de la Verdad, para la reconstrucción de la nación. Estos aspectos están incluidos en los diferentes niveles de desarrollo ya que éste se considera un factor clave para promover la paz, seguridad y justicia duraderas: desarrollo social (memoria colectiva, identidad, educación y las necesidades de las víctimas); desarrollo político (construcción de paz, independencia y transparencia, medios de comunicación y liderazgo) y desarrollo económico más allá de los programas de asistencia económica. Estos aspectos pueden ayudar a forjar una paz duradera para las sociedades que salen de una experiencia colectiva atroz de violaciones sistemáticas de los derechos humanos.

## DESARROLLO

*“El desarrollo y la paz están estrechamente unidos: uno no puede conseguirse si el otro falla”*

Jan Pronk, Former Dutch Minister for Development Cooperation (UNHCR 1996)

*“El desarrollo hace a todos más seguros”*

UN 2004

## DESARROLLO SOCIAL

### 1. MEMORIA COLECTIVA

Siguiendo el interaccionismo simbólico, no existe una única realidad sino diferentes modos de interpretar los hechos que suceden a nuestro alrededor. Las personas construyen los significados acordes a su realidad que ayudan a entenderla. Así,

“el conflicto está conectado al significado, el significado al conocimiento y el conocimiento tiene raíz en la cultura” (Lederach 1995:8). En este sentido, los conflictos no suceden simplemente a las personas sino que éstas participan activamente en la creación de situaciones e interacciones experimentadas como conflicto. Desde una perspectiva, los regímenes militares expresan cierta reacción institucional que los cargos poderosos junto con las Fuerzas Militares llevan a cabo para reprimir o frenar los movimientos sociales y políticos emergentes que pretenden cambios en el sistema. Desde otra perspectiva, los regímenes militares se ven como una respuesta social necesaria para controlar el caos social que los sectores insurgentes crean al demandar cambios estructurales (Durán Perez et al. 2001). Estas dos perspectivas diferentes ilustran lo que Lederach (1995) escribió sobre cómo las personas de diferentes bagajes culturales desarrollan distintas formas de crear, expresar, interpretar y manejar el conflicto.

Las verdades de las experiencias personales y colectivas son múltiples, por ello, el proceso de crear una nueva política cultural pasa por hacer lo que se denomina una “reconciliación de memorias”. Si falta una memoria colectiva y las personas no comparten el mismo pasado, no podrá haber una comunidad real ni tampoco opciones para la reconstrucción nacional. Como H. Richard Niebuhr dijo: “donde haya que formar una comunidad debe crearse una memoria colectiva (...) y nuestra unidad se mide por la extensión de nuestra memoria colectiva” (1941:64).

Para poder entender la memoria colectiva, debe aclararse el concepto de violencia colectiva. Cabe subrayar que este tipo de explosiones de violencia social no son fenómenos sociales espontáneos sino actos cuidadosamente organizados y motivados ideológicamente. Además, la guerra no sucede por los instintos agresivos de los seres humanos porque la mayoría de las personas involucradas están actuando forzadamente u obligados por las circunstancias. La violencia colectiva la llevan a cabo personas que matan colectivamente, generalmente siguiendo órdenes institucionales (Ubillos et al. 2011:20).

**TABLA 1. Procesos socio-cognitivos de la agresión social**

| <b>Individualmente</b>                          | <b>Colectivamente</b>  |
|---|--|
| Justificación moral                             | Organización política amenazada  |
| Distanciamiento psicológico y deslegitimización | Marginalización de grupos ideológicos  |
| Perpetrados individuales                        | Alianzas de Guerra. Las élites políticas saben que es improbable que se les impute por sus crímenes. |

(2011:23)

Estos procesos socio-cognitivos son clave para entender los círculos viciosos de violencia. Una vez que la víctima es desmoralizada y devaluada humanamente, se produce una inversión de la moralidad y los agresores pueden considerar el asesinato como una obligación moral (Ubillos et al.2011). Hay una necesidad urgente de redefinir los conceptos morales y restaurar el respeto por los derechos humanos básicos.

Se ha estudiado que aquellos países con un porcentaje mayor de violencia colectiva, son más proclives a evitar incertidumbres y aquellos con alto miedo a la incertidumbre expresan niveles de ansiedad social más altos (Hofstede 2001). Así, la memoria colectiva es clave para reducir la incertidumbre y ansiedad sociales. Es una tarea difícil que debe ser cuidadosamente dirigida ya que si no puede revivir el conflicto con un nuevo círculo de violencia donde las heridas del pasado justificarían las atrocidades del futuro (Licata et al. 2011). La memoria colectiva se define como las “representaciones del pasado compartidas y basadas en una identidad común de los miembros de un grupo” (Licata y Klein 2005:243). Es una actividad de desarrollo social y comunicación.

La mayoría de las concepciones sobre memoria colectiva se relacionan con Maurice Halbwachs. Éste cree que “la mente reconstruye los recuerdos bajo la presión de la sociedad” (Halbwachs 1992:51). Por ello, la memoria colectiva no puede desprenderse de la sociedad, “tan pronto como situamos a la gente en sociedad ya no es posible distinguir entre dos tipos de observaciones, una exterior, otra interior” (1992:169). El recuerdo individual se forma por los grupos a los que el individuo pertenece, más concretamente, por las prácticas sociales de los grupos específicos de los que es miembro. Además, este autor afirma que las representaciones particulares del

pasado son compartidas por la colectividad y se actualizan continuamente a través de las prácticas colectivas y rituales. Cada grupo social tiene su propia memoria colectiva la cual no se comparte homogéneamente con el resto de la sociedad. Como él mismo afirma, “nuestros recuerdos, cada uno en sí mismo, pertenecen a todo el mundo; pero la coherencia o el arreglo de nuestros recuerdos pertenece sólo a nosotros mismos. (...) La principal cuestión es saber si lo que es verdad de cada una de las partes, es también verdad en su conjunto (Halbwachs 1992:171).

## 2. IDENTIDAD

*“Haces la paz con tus enemigos”*

Yogi Berra

La memoria colectiva está especialmente ligada a la identidad. De hecho, la memoria colectiva tiene cuatro funciones identitarias básicas: a) *define la identidad* de modo narrativo ya que proporciona a la población discursos sobre quiénes son, de dónde vienen y a dónde ir. El hecho de que sea compartida ayuda a crear cohesión de grupo.; b) *define el valor* de la identidad de grupo. Según la Teoría de la Identidad Social (TIS), el valor de un grupo se mide en comparación con la de otros grupos que restringen o aumentan la autoestima del propio grupo (Turner 1985). Así, el pasado se convierte en una negociación entre grupos y dentro de cada grupo; c) *la justificación de los actos del grupo*; y d) *movilización colectiva* ya que el pasado es un recurso retórico para los políticos que quieren movilizar a la colectividad (Licata et al. 2011:360).

El auto-concepto, que es en gran medida relacional y comparativo (Turner 1985), está formado por la identidad social y personal. La identidad social, que difiere de la personal, se define como la parte de uno que deriva de la pertenencia a grupos. Según la TIS, el individuo se identifica con categorías sociales en parte para potenciar su autoestima. En situaciones en las que la autoestima individual y social ha sido destruida por un conflicto, el descubrimiento de la verdad es el primer paso para la reconstrucción de la identidad. Así, las Comisiones de la Verdad deben tener en cuenta estas identidades quebradas y las aspiraciones de los civiles de restaurarlas y reconstruirlas.

Turner (1984) propuso la existencia de un “grupo psicológico” definido como “un conjunto de personas que comparten la misma identificación social o se definen como miembros de la misma categoría social”. Sin embargo, un miembro de un “grupo psicológico” no necesita interactuar como o con los otros miembros, o ser como ni aceptado por ellos. Así, Turner (1985) afirma que un grupo psicológico es mucho más que una extensión de las relaciones interpersonales: la identificación con un colectivo puede surgir incluso en la ausencia de cohesión interpersonal, similitud o interacción y tener de igual modo un impacto en el afecto y el comportamiento. Es importante que las víctimas dejen de lado su identidad de víctima y avancen hasta que se perciban como ciudadanos normales en pleno derecho (Beristain 2006).

Las Comisiones de la Verdad no trabajan en la creación de una identidad colectiva ya que no forma parte del mandato. Sin embargo, el proceso de descubrimiento de la verdad en el que sí trabajan esboza un futuro basado en una identidad común reconstruida. En este sentido funciona el “diálogo de restitución”. Porque “el diálogo que se centra en el reconocimiento mutuo de las identidades e historias percibidas de los protagonistas, trasciende las identidades excluyentes y proporciona un modo prudente de afirmar tanto los principios de los derechos humanos individuales como los derechos del nuevo grupo” (Barkan 2000:319). La restitución pretende proporcionar un mecanismo para negociar las rivalidades y reconocer identidades en vez de ignorarlas. Como afirma Barkan, “la restitución une la separación moral entre el escenario internacional y el multiculturalismo doméstico (...). El diálogo de restitución aporta nuevas perspectivas plurales de la historia nacional y de la actual identidad a la opinión y visión públicas y, por tanto, redefine la nación” (2000:321). No obstante, no puede considerarse una solución o un estándar ya que es un proceso, una ideología.

En este sentido, a veces en situaciones de post-conflicto se requiere que las personas dejen de lado cierta parte de su identidad personal para poder fomentar la identidad social y crear así un futuro común con el resto de miembros de la sociedad. Esto se relaciona con la perspectiva utilitarista que busca maximizar el bien de la sociedad. Sin embargo, esta noción se opone a los teóricos neo-Ilustrados que rechazan la noción de un sistema moral global y reconocen, en cambio, que únicamente resoluciones locales voluntarias pueden proporcionar soluciones tentativas (Barkan 2000). Uno de los autores más influenciados de esta corriente liberal es John Rawls.

Según él, los derechos individuales son prioritarios y superiores al bien común y no pueden ser sacrificados bajo ninguna circunstancia (Rawls 1971). No obstante, como remarca Barkan, “el reto de la política contemporánea es incorporar tanto la identidad de grupo como el individualismo en una moralidad global” (2000:314).

### 3. EDUCACIÓN

La educación es el aspecto clave para que toda sociedad se desarrolle ya que hace a la nación más fuerte y amplía sus oportunidades. Por ello, es fundamental en la creación de paz. Como asegura Curle (1971), la educación, el apoyo activo y la mediación son los tres elementos clave del proceso de creación de paz y todos comparten el objetivo de reestructurar las relaciones antagónicas. La educación o concienciación elimina la ignorancia, restaura la equidad y es necesaria cuando el conflicto se mantiene oculto y las personas no son conscientes de las injusticias. Por ejemplo, en Guatemala, un estudio ha demostrado que muchos guatemaltecos consideran que los temas de derechos humanos no benefician más que a las personas incorrectas: los criminales. Además, coincidiendo con esta desconfianza pública del activismo de los derechos humanos se correlaciona el resurgimiento de elementos autoritarios (Azpuru 2006). Este ejemplo ilustra la necesidad de los programas de educación y por ello se creó el programa de Cultura de Paz por la UNESCO para introducir a Guatemala en una cultura de respeto mutuo y paz. Se desarrolló en el año 2000 y “se introdujeron los derechos humanos, la democracia y la justicia social en el currículo escolar” (Azpuru 2006:111). En Chile, para fomentar una cultura respetuosa con los derechos humanos, se creó el Departamento de Promoción Cultural y Educación, ofreciendo numerosos cursos, talleres y actividades para la formación de profesores de todos los niveles en materia de derechos humanos (Durán Pérez et al. 2001).

En Sierra Leona, por el contrario, no hay una educación sobre derechos humanos en las escuelas. Ello es una tarea de las organizaciones locales que intentan proporcionarla a través de radio, posters, manuales y reuniones comunales. No obstante, hay muy poca gente que tenga radio, el 70% de la población es analfabeta y la presencia de las organizaciones locales se limita a ciudades lo cual significa que la educación en



derechos humanos no ha llegado a la mayoría de los habitantes de Sierra Leona que viven en zonas rurales (Sesay y Hughes 2006).

Las diferentes creencias, actitudes y emociones creadas durante el conflicto afectan a toda la población. Se utilizan para controlar y justificar la situación conflictiva y se expresan y reproducen a través de la comunicación, creando así una cultura de violencia en la que todas las generaciones afectadas por el conflicto son socializadas (Rosen et al. 2011). El respeto a los derechos humanos es la base para la reconciliación y un futuro democrático. De hecho, métodos holísticos de educación en la paz deberían ser priorizados ya que “reconstruyen la mayoría de las relaciones sociales (...) y su objetivo último es evitar todos los aspectos directos e indirectos de la violencia” (Ben-Porath 2006:65). Estos métodos abarcan la comprensión de las asimetrías de poder, las desigualdades y cooperación, la historia del conflicto, el conflicto así como el proceso de paz. También hay educación en memoria colectiva, la importancia de los derechos humanos, identidad del propio grupo y de grupos marginalizados, la percepción del otro bando (el enemigo) en el conflicto, la necesidad de empatía y confianza además de fomentar el pensamiento crítico (Rosen et al. 2011). En otras palabras, la educación en la paz es una socialización importante para la reconciliación, por lo que el conocimiento transmitido debe ser coherente con los objetivos de reconciliación del país. Para que este objetivo de educación sea real debe contar con el apoyo esencial político y estatal.

#### **4. LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS**

La población civil representa el grueso de las víctimas. Éstas forman un grupo heterogéneo de diferentes edades, clases, etnias y comunidades, cada una con su propia historia y experiencia del conflicto; cada una con sus propias tradiciones, rituales y concepciones simbólicas de la comunidad. Esta heterogeneidad social sufre desproporcionadamente durante el conflicto y puede tener diferentes modos de superar las atrocidades vividas. Así, sus necesidades son muy diversas, siendo las compensaciones, el apoyo psicológico y la seguridad los ingredientes clave para fomentar la cooperación y reconciliación. Las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) en Guatemala incluían tanto formas individuales como colectivas de reparación, compensación económica y pasos para restaurar la dignidad humana (Popkin 2000).

La Comisión para la Verdad y Reconciliación (TRC) de Sudáfrica propuso varias formas de reparación moral y monetaria. Las víctimas con mayor necesidad tendrían acceso preferente a ciertos servicios. La TRC recomendó que cada víctima recibiese una ayuda económica durante seis años además de las reparaciones simbólicas para facilitar los procesos comunales de conmemoración a las víctimas del pasado. Éstas incluyen un día nacional de recuerdo, construcción de memoriales y monumentos así como museos. Otras recomendaciones incluían programas de rehabilitación comunal para promocionar la cura y la recuperación de las víctimas y comunidades afectadas (Popkin 2000). La situación en Sudáfrica era más favorable ya que el ANC, que representaba la mayoría de las víctimas, era el partido gobernante. Sin embargo, como asegura Popkin (2000), hubo un intenso debate sobre las recomendaciones: unos consideraban que las políticas de reparación debían ser individuales y otros insistían que todas las víctimas deberían ser tratadas por igual.

La mayoría de las necesidades de las víctimas son psicológicas: ayudarles a hablar y a superar el trauma. En Sudáfrica el grupo de apoyo a las víctimas Kulumani se creó para ayudar a los supervivientes que iban a participar en la TRC. El objetivo era ayudarles a hablar de sus historias y atenderlos psicológicamente compartiendo sus experiencias (Beristain 2006).

## **DESARROLLO POLÍTICO**

### **1. CONSOLIDACIÓN DE LA PAZ**

La consolidación de la paz se define como “las acciones al final de un conflicto civil para afianzar la paz y prevenir la repetición del combate” (Paris 2004:38) y no es simplemente una forma de deshacerse de una situación indeseable. El objetivo es generar “procesos continuos, dinámicos y auto-regeneradores que se mantengan en el tiempo y sean capaces de adaptarse a los cambios de contexto” (Lederach 1997:84). La consolidación de la paz incluye apoyo financiero, material y recursos socio-culturales (incluyendo a las personas).

Los conflictos contemporáneos no son internacionales o interestatales como antes de la Guerra Fría, sino intraestatales. Así, éstos se sustentan más por factores psicológicos o culturales que por cuestiones sustanciales y tienden a ser de larga

duración. Debido a esto el método de consolidación de paz que estaba adaptado a las antiguas guerras entre estados, está siendo rediseñado con nuevos métodos que se ajustan mejor a las características actuales. Lederach (1997) exige un cambio desde la diplomacia tradicional con líderes de alto nivel y objetivos a corto plazo a un método que integre los múltiples niveles de los actores, objetivos a largo plazo y la cura de las relaciones y personas. Así, la formación en resolución de conflictos tiene que ser lo que el autor denomina “una formación transformativa” que busca la coordinación entre los diferentes actores y niveles, busca la responsabilidad de las intervenciones en el contexto de conflicto así como identificar objetivos provisionales y a largo plazo. Consecuentemente se observa que la consolidación de paz actualmente tiene que hacer frente a numerosos desafíos, de los cuales se resaltan los siguientes: los enfoques tienen que tener una perspectiva más a largo plazo, más amplia y más comprehensiva de las personas y contextos en los que se produce el conflicto para poder crear una paz duradera. Además también debe impedir que los conflictos menores escalen hacia una guerra abierta (Lederach 1997).

## **2. INDEPENDENCIA Y TRANSPARENCIA**

Hay una conclusión común respecto al desarrollo político que Rothstein (1999) subraya: la necesidad de acomodar la política entre la nueva democracia y sus partidarios y las fuerzas todavía influyentes del antiguo régimen. Para ello, “una perspectiva de confrontación de suma-cero debe ser sustituida por una aceptación de la necesidad de compartir las ganancias (inicialmente asimétricas) y una conciencia de destino común” (Rothstein 1999:230). Además la situación inicial de dilema de seguridad debe reemplazarse por el énfasis en medidas de fomento de confianza. En este proceso de aprendizaje, la comunicación y la cooperación deben generar una élite intergrupala unida. Se pretende que los partidos implicados compartan la convicción de que la otra parte es fiable y que hay mayores beneficios en cooperar que en buscar el engaño. Sin embargo, en este proceso de aprendizaje la buena fe no debe darse por sentada (Rothstein 1999). Los acuerdos de paz entre comunidades de un Estado suelen ser relativamente más fáciles por la distribución de poder: el deseo de votos y apoyo del máximo número de grupos posible es un incentivo importante para que los líderes presten atención a las demandas del pueblo.

Para fomentar el desarrollo político, las organizaciones civiles de niveles más locales deben ser priorizadas y debería prestarse más atención a la capacidad de integrar a miembros en estas organizaciones, no únicamente en las ciudades y capitales de provincias sino también en zonas rurales (Zeeuv y Goor 2006). Además, los programas de promoción democrática requieren una burocracia estatal en buen funcionamiento. De hecho, “todas las sociedad en post-conflicto requieren una administración electoral bien preparada y dirigida que organice elecciones libres y justas, agencias de refuerzo judicial profesionales, así como agencias reguladoras que aseguren el acceso a los medios de comunicación electrónicos” (Zeeuv y Goor 2006:283).

### 3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación libres e independientes son clave para el desarrollo político ya que tienen un papel esencial en la reconstrucción de la sociedad civil. Como alega Rothstein (1999), las meras imágenes de los medios, aunque no sea suficiente, son importantes para convencer a muchos ciudadanos de que cambien su imagen sobre los antagonistas. Además, “los medios de comunicación son una parte fundamental del proceso de cura al ofrecer un espacio para expresar el dolor y sirven para potenciar grupos que antes habían sido silenciados” (Reychler y Paffenholz 2001:306). Este fue el caso de Sudáfrica donde los testimonios del TRC fueron en público y emitidos por radio y televisión. De hecho, El Reportaje Especial de la Comisión de la Verdad, un programa a la noche de una hora en televisión, tuvo el máximo de audiencia de todas las noticias y asuntos de actualidad de Sudáfrica. Uganda es otro ejemplo donde todas las entrevistas se hicieron en público y fueron emitidas en radio y televisión.

La cobertura mediática es también importante para el desarrollo político. La libertad de expresión es un derecho humano y suele utilizarse como indicador del nivel democrático de un país. Sin embargo, la libertad de expresión puede ser utilizada para fomentar el conflicto (“hate media”) o para reducir tensiones (“peace media”). Hate media se define como aquella “que estimula las actividades violentas, tensiones u odio entre razas, grupos étnicos o sociales, o países por motivos políticos y/o para fomentar el conflicto ofreciendo una versión parcial y sesgada” (Reychler y Paffenholz 2001:304). Hate media tuvo un papel clave en el genocidio de Ruanda. La estación de radio extremista RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) hacía a menudo

llamamientos explícitos para que los Hutus participasen en las matanzas. En una ocasión anunció “habéis dejado algunos enemigos en este u otro sitio. Algunos siguen vivos. Tenéis que volver y acabar con ellos. Los cementerios no están todavía llenos” (Prunier 1995:20). Consecuentemente, la confianza pública en los medios de comunicación fue seriamente dañada.

Por otro lado, peace media se define como aquella “que promueve condiciones de vida pacíficas y resolución del conflicto, o contrarresta al hate media representando una fuente alternativa de información” (Reychler y Paffenholz 2011:306). De hecho, para promocionar la solidaridad periodística en Ruanda, la UNESCO creó la Press House: un lugar donde los profesionales podían reunirse. El proyecto no funcionó por falta de recursos y sostenibilidad (Kayumba y Kimonyo 2006). Resaltar que los medios de comunicación independientes pueden servir como observadores, añadiendo presión política a la reforma democrática. Además, las situaciones de conflicto suelen atraer a los medios que buscan vender imágenes de las tragedias, lo cual puede facilitar la afluencia de financiación internacional y asistencia técnica (Del Castillo 2008). No obstante para que esto sea una realidad deben superarse numerosos problemas como la represión, el acceso limitado, los altos costes, la fragmentación y la limitación de la prensa escrita, entre otros (Kayumba y Kimonyo 2006).

#### **4. LIDERAZGO**

La reacción de los gobiernos ante el informe final de una Comisión es un momento determinante que influye el ambiente del país y el futuro camino de las recomendaciones. Para impulsar la democracia, la confianza en las instituciones estatales, el Estado de Derecho y la seguridad, el gobierno debe aprobar y promocionar el informe final. Ha habido diversas reacciones en este respecto. Generalmente, los gobiernos suelen aprobar el informe final cuando no aparecen en éste nombres de los agresores y únicamente se revelan los actos violentos. Este fue el caso de Guatemala y Chile. En ambos países los respectivos presidentes se disculparon en el nombre del gobierno por las acciones pasadas, pidiendo perdón y asumiendo la responsabilidad.

Sin embargo, en países donde los nombres de agresores sí aparecen en el informe, las reacciones de los gobiernos son negativas y defensivas. Cuando el gobierno

de El Salvador fue consciente de algunos de los nombres hechos públicos, lanzó una campaña diplomática ofensiva para intentar convencer a la Comisión que evitara los nombres. Cuando el informe se publicó con los nombres, el presidente Cristiani, la Corte Suprema y otros líderes importantes mostraron su insatisfacción catalogándolo el informe de “parcial, incompleto, injusto y totalmente inaceptable” (Popkin 2000:121). Además, el gobierno no se esforzó por distribuirlo y siete años después, seguía difícilmente disponible y poco leído. Algo parecido a menor escala sucedió en Sudáfrica donde el ANZ intentó impedir la publicación del TRC porque algunos de sus líderes eran responsables de serias violaciones de derechos humanos.

Un liderazgo eficaz es un aspecto crucial para la transformación del conflicto y la reconciliación. Todos los tipos de liderazgo son importantes, incluyendo los del nivel medio y base, pero los de alto nivel tienen un rol más notable. Éstos tienen un estatus alto, poder y autoridad y por ello tienen un potencial e influencia enormes para cambiar las cosas (Lederach 1997).

## **DESARROLLO ECONÓMICO**

La justicia y equidad económicas son aspectos fundamentales para la reconciliación (Beristain 2006). La reconstrucción económica se entiende aquí en un sentido amplio que incluye la rehabilitación de los servicios básicos, la reconstrucción de la infraestructura física y humana, políticas de estabilización y reforma estructural así como fundaciones microeconómicas necesarias para crear un mercado económico y reactivar la inversión y el crecimiento económico a gran escala. Estas fundaciones incluyen un clima de negocios adecuado, una financiación apropiada e infraestructura para el sector privado, un cuerpo burocrático eficaz y un marco legal, regulador e institucional conveniente (Del Castillo 2008).

Se ha descubierto recientemente que “de media, un país que ha experimentado violencia en el período de 1981 a 2005 tiene un índice de pobreza de 21 por ciento puntos más que un país que no haya sufrido violencia” (Lockhart y Vincent 2013:11). Esto muestra lo estrechamente ligadas que están la paz y la economía. A pesar de todas las particularidades de cada conflicto y cada país, hay una serie de características para la reconstrucción económica de post-conflicto que Del Castillo (2008) enumera: a) capital

humano e infraestructura física devastadas; b) corrupción, falta de transparencia, inadecuada protección de los derechos de propiedad, incompetencia del banco central y una débil administración de impuestos entre otros; c) gran dependencia de la ayudas económicas, sobre todo al principio de la transición; d) atrasos en los pagos de la deuda externa y la necesidad de normalizar las relaciones con los acreedores; y e) deberían priorizarse actividades de formación, capacitación y fortalecimiento institucionales, y de generación de empleo. En otras palabras, el requisito común para la reconstrucción económica es la vuelta a la paz, el Estado de Derecho y la aceptación del nuevo gobierno y de sus cuerpos estatales (Del Castillo 2008). También resaltar que la paz depende en gran medida de la creación de empleo y de la estabilidad así como del crecimiento económico del país.

El desarrollo económico en situaciones de post-conflicto incluye objetivos a corto plazo como la creación de empleo, pero también a largo plazo como la reducción de la pobreza, desarrollo sostenible y protección medioambiental. Esta reconstrucción económica es especialmente difícil porque tiene que integrar los objetivos económicos dentro del proceso de paz que se ocupa de un “dividendo de paz” y una estructura completamente arrasada. El “dividendo de paz” se refiere a la asistencia económica y humanitaria relacionada con el proceso de paz que proviene generalmente de la comunidad internacional. Consecuentemente, esta ayuda financiera va de la mano de una intensa implicación (a veces intromisión) política de la comunidad internacional en los asuntos internos del país. En algunos casos, “tal asistencia incluye policía y militares, ya que la mejora de la seguridad suele ser un imperativo antes de comenzar la reconstrucción y reactivación del crecimiento económico” (Del Castillo 2008:35).

No obstante, las ayudas deberían dirigirse a través del Estado para apoyar una estrategia integrada de reconstrucción nacional, y estas ayudas no deberían extenderse demasiado en el tiempo ya que si no desalentará el trabajo e irán en contra de los esfuerzos de crecimiento nacional (USIP 2011). Asimismo, como comenta Del Castillo (2008), aunque el desarrollo económico sea clave para el proceso de pacificación, si se da conflicto entre los objetivos políticos y los económicos, los primeros deben ser siempre la prioridad básica.

## CONCLUSIÓN

Fisher afirma que “aunque los conflictos comiencen por ‘diferencias objetivas e ideológicas’, su escalada sucede por factores como (...) malinterpretación, desconfianza y necesidades básicas frustradas” (1999:85). Esto es precisamente la fuerza y la importancia de las Comisiones de la Verdad en situaciones de post-conflicto. Éstas pueden clarificar la violencia ocurrida en el pasado evitando mitos, el silencio y una posible reaparición del conflicto debido a la ignorancia de los factores que lo condujeron. Las Comisiones de la Verdad están, efectivamente, restringidas por su mandato, las dinámicas de poder del país y un contexto de incertidumbre y miedo pero abren el camino para el consecuente proceso de reconstrucción nacional y unidad que ayudará a fomentar un futuro democrático. Las Comisiones tienen las herramientas para recomendar lo que ayudará el objetivo último de paz duradera. Queda bajo responsabilidad política implementarlo de un modo progresivo e inclusivo. El liderazgo es un factor clave para aplicar las medidas de consolidación de paz necesarias a través de políticas independientes y transparentes.

La cultura de paz dependerá una serie de factores socio-estructurales, políticos y culturales que incluyen: educación en la resolución pacífica de conflictos, cooperación y cuidado mutuo; aceptación de las minorías con tolerancia y solidaridad social; respeto general a los derechos humanos; desarrollo económico sostenible (reduciendo las diferencias sociales y económicas entre las comunidades y potenciando la justicia económica); participación política; libertad de expresión y medios de comunicación independientes; una paz estable y seguridad. Estos son los ingredientes fundamentales para la reconstrucción de una sociedad en post-conflicto para evitar la reaparición de la violencia. El tiempo por sí mismo no crea reconciliación pero ésta necesita mucho tiempo: décadas o incluso generaciones.



La siguiente tabla resume las transiciones que se deben dar para cambiar del conflicto y la fragilidad a la estabilidad:

| <b>Multiple Transitions from conflict/fragility to stability</b> |  |
|--|--|
| <i>From</i>  | <i>To</i>  |
| Conflict   | - Politics and security  |
| Charisma   | - Management and institutional accountability                          |
| Opaqueness   | - Transparent management of public finances                            |
| Absence of service delivery                                      | - Nurturing human capital  |
| Oppositional identities  | - Citizenship rights and formation of a civil society                  |
| Destruction  | - Creation of infrastructure   |
| Subsistence and war economy                                      | - Market economy   |
| Diversion and privatisation of state assets                      | - Creation of public value   |
| Marginalisation and illegitimacy                                 | - Assuming responsibilities as a member of the international community |
| Rule of the gun  | - Rule of law  |

*Carnahan, Ghani and Lockhart, 2006. En Lockart y Vincent 2013:12.*

## BIBLIOGRAFÍA

Ainley, Kirsten (2011): “Excesses of Responsibility: The Limits of Law and the Possibilities of Politics”. In *Ethics and International Affairs*, 25 (4): 407-431.

Amnesty International (2010): *International Criminal Court. Making the Right Choices at the Review Conference*. Available at

<http://www.amnesty.org/es/library/asset/IOR40/008/2010/es/faad9888-c9fb-425a-98bc-fcce1d5e075f/ior400082010en.pdf>

Azpuru, Dinorah (2006): “Strengthening Human Rights in Guatemala”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen y Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers.

Barkan, Elazar (2000): *The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices*. Baltimore: John Hopkins University Press

Ben-Porath, Sigal R. (2006): *Citizenship under fire: Democratic education in times of conflict*. Princeton: Princeton University Press.

Beristain, Carlos Martín (2006): “Reconciliación Luego de Conflictos Violentos: Un Marco Teórico”. En *Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos Para la Democracia y la Convivencia Social*. San José: IIDH-IDEA.

Bhargava, Rajeev (2000): “Restoring Decency to Barbaric Societies”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Boraine, Alex (2000): “Truth and Reconciliation in South Africa: The Third Way”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Brahm, Eric (2004): “Getting to the Bottom of the Truth: Evaluating the Contribution of Truth Commission to Post Conflict Societies”. Page 26. Presented at the Wisconsin institute for Peace and Conflict Studies 20<sup>th</sup> Annual Conference “Challenges and Paths to Justice”, Marquette Univeristy, Milwaukee, Wisconsin, October 6-8 2004.

Brahm, Eric (2007): “Uncovering the Truth: Examining Truth Commissions Success and Impact”. In *International Studies Perspectives* (8):16-35

Brody, Reed (2001): "Justice: The First Casualty of Truth?" *The Nation*. Available at <http://www.thenation.com/article/justice-first-casualty-truth#axzz2X9JZo735>

Burg, Steven L. (1950): *War or Peace? Nationalism, Democracy and American Foreign Policy in Post-Communist Europe*. New York: New York University Press.

Chapman, Audrey R. y Patrick Ball (2001): "The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala". In *Human Rights Quarterly* 23:1-43.

Crocker, David A. (2000): "Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Society". In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Curle, Adam (1971): *Making Peace*. California: Tavistock Publications.

Del Castillo, Graciana (2008): *Rebuilding War-Torn States. The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction*. Oxford: Oxford University Press.

Durán Pérez, Teresa, Roberta Bacic Herzfeld y Pau Pérez Sales (2001): "Muerte y Desaparición Forzada en la Araucanía: Una Aproximación Étnica". En *Ko'ãga Roñe'etã*, serie X Libros. Available at [http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/analisis\\_desaparicion/b/contentFile/s/Perez-Sales-Muerte\\_y\\_Desaparicion\\_Forzada.pdf](http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/analisis_desaparicion/b/contentFile/s/Perez-Sales-Muerte_y_Desaparicion_Forzada.pdf)

Elster, Jon (2004): *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fisher, Ronald J. (1999): "Social-Psychological Processes in Interactive Conflict Analysis and Reconciliation." In Howon Jeong, ed., *The New Agenda for Peace Research*. Ashgate: Aldershot.

Halbwachs, Maurice (1992): *On Collective Memory*. London: The University of Chicago Press.

Hamber, Brandon y Grainne Kelly (2005): *A Place for Reconciliation? Conflict and Locality in Northern Ireland* (Report No. 18). Belfast, Northern Ireland: Democratic Dialogue.

Hamber, Brandon (2007): “Forgiveness and Reconciliation: Paradise Lost or Pragmatism?” In *Journal of Peace Psychology*, 13 (1): 115-125.

Hayner, Priscilla B. (2001): *Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge.

Hofstede, Geert H. (2001): *Culture's Consequences*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage.

Huyse, Luc (2003): “The Process of Reconciliation”. In Bloomfield, David, Teresa Barnes y Luc Huyse (Eds.), *Reconciliation after violent conflict: A handbook*. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Ignatieff, Michael (1996): “Articles of Faith”. In *Index on Censorship*, 25(5), 110–122.

Kayumba, Christopher y Jean Paul Kimonyo (2006): “Media Assistance to Postgenocide Rwanda”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen y Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Kiss, Elizabeth (2000): “Moral Ambition Within and Beyond Political Constraints: Reflections on Restorative Justice”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Kriesberg, Louis (1998): “Coexistence and the Reconciliation of Communal Conflicts”. In Eugene Wenrier (ed.), *The Handbook of Interethnic Coexistence*. New York: The Continuum Publishing Company

Mamdani, Mahmood (1996): “Reconciliation Without Justice”. In *South African Review of Books* (46): 3-5. Available at [http://web.uct.ac.za/depts/sarb/X0045\\_Mamdani.html](http://web.uct.ac.za/depts/sarb/X0045_Mamdani.html)

Minow, Martha (2000): “The Hope for Healing: What Can Truth Commissions Do?”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert. I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Morales, Jenny Juliet (2011): Aproximación a la Justicia Transicional: Interrogantes Sobre su Aplicabilidad en Colombia. In *Diálogos de Derecho y Política*, 7 (2):1-14

Niebuhr, Helmut Richard (1941): *The Meaning of Revelation*. Westminster: The Macmillan Company

Lederach, John Paul. (1995): *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. New York: Syracuse University Press

Lederach, John Paul (1997):. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. New York: United States Institute of Peace Press

Lerche, Charles (2000): “Peace Building Through Reconciliation”. In *The International Journal of Peace Studies*, 5 (2). Available at [http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol5\\_2/lerche.htm](http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol5_2/lerche.htm)

Levinson, Standford (2000): “Trials, Commissions and Investigating Committees: The Elusive Search for Norms of Due Process”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Licata, Laurent y Oliver Klein (2005): “Regards croisés sur un passé commun: anciens colonisés et anciens coloniaux face à l'action belge au Congo”. In *L'Autre: regards psychosociaux*. Eds: Sánchez-Mazas, Margarita y Laurent Licata. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Licata, Laurent, Oliver Klein, Raphaël Gély, Elena Zubieta y Alejandra Alarcón Henríquez (2011): “Memoria de Conflictos, Conflictos de Memoria: Un Abordaje Psicosocial y Filosófico del Rol de la Memoria Colectiva en los Procesos de Reconciliación Intergrupala”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro.; Nekane Basabe y Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Lockhart, Clare y Sam Vincent (2013): *Ending Extreme Poverty in Fragile and Conflict-affected Situations*. Submitted to the High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda. Available at [http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Lockhart-Vincent\\_Ending-Extreme-Poverty-in-Fragile-and-Conflict-affected-Situations.pdf](http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Lockhart-Vincent_Ending-Extreme-Poverty-in-Fragile-and-Conflict-affected-Situations.pdf)

Orentlicher, Diane (2005): *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*. UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.

Paris, Roland (2004): *At War's End. Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.

Popkin, Margaret (2000): *Peace Without Justice. Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press

Prunier, Gérard (1995): *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*. New York: Columbia University Press

Rawls, John (1971): *A Theory of Justice*. Harvard: Harvard University Press.

Rettberg, Angélica (2005): *Entre el Perdón y el Paredón: Preguntas y Dilemas de la Justicia Transicional*. Ediciones Uniandes, Bogotá: Corcas Editores.

Reychler, Luc y Thania Paffenholz (2001): *Peace-Building: A Field Guide*. London: Lynne Rienner Publishers.

Rosen, Yigal, Daniel Bar-tal y Rafi Nets-Zehngut (2011): “Educación para la Paz en las Sociedades Involucradas en Conflictos Complejos e Insolubles: Objetivos, Condiciones y Direcciones”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro.; Nekane Basabe y Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Rotberg, Robert I. (2000): “Truth Commissions and the Provision of Truth, Justice and Reconciliation”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. y Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Rothstein, Robert L. (1999): *After the Peace: Resistance and Reconciliation*. London: Lynne Rienner Publishers

Sesay, Mohamed Gibril y Charlie Hughes. (2006): “Human Rights Assistance to Sierra Leone”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen y Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Sikkink, Kathryn y Carrie Booth Walling. (2007): “The Impact of Human rights trials in Latin America”. In *Journal of Peace Research*, 44(4): 427-445.

Skaar, Elin (1999): “Truth Commission, Trials-or Nothing? Policy Options in Democratic Transitions”. In *Third World Quarterly*, 20 (6): 1109-1128.

The World Bank. (1997): “From Civil War To Civil Society. The Transition From War To Peace in Guatemala and Liberia”. In *The Atlanta Workshop*. Atlanta: The World Bank and the Carter Center.

Turner, John C. (1984): “Social identification and psychological group formation”. In *The social dimension: European developments in social psychology*. Ed: Tajfel, Henri. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Turner, John C. (1985): “Social categorization and the self- concept: A social cognitive theory of group behavior”. In *Advances in group processes*. Ed: Lawler, Edward J. Greenwich, CT: JAI Press

Ubillos, Silvia, Carlos Martín Beristain, Maite Garaigordobil y Eran Halperín (2011): “Agresión, Odio, Conflictos Intergrupales y Violencia Colectiva”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro, Nekane Basabe y Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Uprimmy, Rodrigo y María Paula Saffon (2005): “Estándares Internacional y Procesos de Paz en Colombia. In *Entre el Perdón y el Paredón, Preguntas y Dilemas de Justicia Transicional*. Ed: Rettberg, Angélica. Ediciones Uniandes, Bogotá: Corcas Editores.

Uprimmy, Rodrigo y María Paula Saffon (2006): *Justicia Transicional y Justicia Restaurativa: Tensiones y Complementariedades. ¿Justicia Transicional sin Transición? Verdad, Justicia y Reparación para Colombia*. Bogotá: Ediciones Antropos.

United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention. (1999): *Handbook on Justice for Victims*. New York. Available at <http://www.uncjin.org/Standards/9857854.pdf>

United States Insitute of Peace (USIP). (2011): *Five Rules for Post-Conflict Economic Reconstruction*. Accessed 21 June 2013. Available at <http://inec.usip.org/blog/2011/mar/18/five-rules-post-conflict-economic-reconstruction>

Zeeuv, Jeroen y Luc van de Goor (2006): “Findings and Recommendations”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen y Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Zehr, Howard. (2002): *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books

Zhu, Ming M. (2008) "Power and Cooperation: Understanding The Road Towards a Truth Commission". In *Buffalo Human Rights Law Review*, 15: 183-200

Zyl, Paul van. (1999) "Dilemmas of Transitional Justice. The Case of South Africa's Truth and Reconciliation Commission". In *Journal of International Affairs*, 52 (2): 647-667.

## ANEXO

**TABLA 1:**

**TABLA 1: IMPACTO DE LOS RITUALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CVR, JUICIOS) EN LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA 16 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. PROMEDIOS COMPARADOS DE VARIACIÓN**

| 1.1 Países con CVR, Juicios e Informes Publicados |                            |           |                                  |                      |                                   |  |                     |           |
|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| País  | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos Obtenidos  | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 1.-Argentina                                      | 1983                       | 1983-84   | 1976- 1983                       | Informe público 1985 | 19                                | 4/(1983)                                     | 2,3                 | 1,7       |
| 2.-Chile  | 1989                       | 1990-1991 | 1973- 1990                       | Informe público 1991 | 15                                | 4/(1986)                                     | 2,8                 | 1,2       |
| 3.-Guatemala                                      | 1994                       | 1997-1999 | 1962- 1996                       | Informe público 1999 | 13                                | 4,4/(1988)                                   | 4,0                 | 0,4       |
| 4.-Peru   | 1990 y 2000                | 2000-2002 | 1980-2000                        | Informe público 2003 | 8                                 | 4,8/(1990)                                   | 3,9                 | 0,9       |
| 5.-Panama   | 1991                       | 2001-2002 | 1968-1989                        | Informe público 2002 | 11                                | 3/(1991)                                     | 2                   | 1         |
| 6.-El Salvador                                    | 1992                       | 1992-1993 | 1968 -1989                       | Informe público 1993 | 4                                 | 4,6/(1985)                                   | 3                   | 1,6       |
| Variación Promedio                                |                            |           |                                  | 1,13                 |                                   |  |                     |           |

Sikkink, K. y Booth-Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights trials in Latin America".



TABLA 2:

| 1.2 Países con CVR disueltas, Informes Limitados, y Juicios. |                            |                |                                  |                                      |                                   |  |                     |           |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| Pais   | Transición a la democracia | Fecha CVR      | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos                  | Duración de los Juicios (en años) | puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 7.-Paraguay  | 1993                       | 2005- 2008     | 1954-2004                        | En proceso                           | 12                                | 3,2' (1989)                                  | 2,6                 | 0,6       |
| 8.- Bolivia  | 1982                       | 1982- 1984     | 1967-1982                        | Sin Informe, Comisión disuelta.      | 2                                 | 4' (1983)                                    | 2,6                 | 1,4       |
| 9.- Ecuador  | 1996                       | 1996 -1997     | 1979-1996                        | Sin Informe, Comisión disuelta.      | 5                                 | 3' (1992)                                    | 2,7                 | 0,3       |
| 10.- Haití   | 1994                       | 1995- 1996     | 1991-1994                        | Informe Limitado, 1996               | 6                                 | 3' (1986)                                    | 3,8                 | -0,8      |
| 11.- Uruguay   | 1984                       | 1985 2000-2001 | 1973-1985                        | Informe Limitado, 1985<br>En proceso | 0                                 | SD.  | SD.                 | SD        |
| Variación Promedio   |                            |                |                                  | 0,37                                 |                                   |  |                     |           |

Sikkink, K. y Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights trials in Latin America".

TABLA 3:

| 1.3 Países con Juicios pero sin CVR |                            |           |                                  |                     |                                   |  |                     |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| Pais                                | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 11.- Honduras                       | 1982                       | No        |                                  |                     | 9                                 | 3,2 /(1992)                                  | 2,7                 | 0,5       |
| 12.- México <sup>7</sup>            | 1995                       | No        |                                  |                     | 5                                 | 3,2 /(1992)                                  | 3,24                | -0,2      |
| 13.- Nicaragua                      | 1990                       | No        |                                  |                     | 5                                 | 3' (1992)                                    | 2,7                 | 0,3       |
| 14.- Venezuela                      | Sin dictadura              | No        |                                  |                     | 5                                 | 3,2 /(1991)                                  | 3,5                 | -0,3      |
| Variación Promedio                  |                            |           |                                  | 0,075               |                                   |  |                     |           |

Sikkink, K. y Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights trials in Latin America".

TABLA 4:

| Países sin Juicios y sin CVR |                            |           |                                  |                     |                                   |  |                     |           |
|------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| País                         | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 15.-Brasil                   | 1985                       | No        | 1964-1985                        |                     | 0                                 | 3,2*   | 4,1                 | -0,9      |
| 16.-Guyana                   |                            | No        |                                  |                     | 0                                 | 2,0*   | 1,9                 | 0,1       |
| Variación Promedio           |                            |           |                                  |                     | -0,4                              |  |                     |           |

Sikkink, K. y Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights trials in Latin America".



**VNiVERSiDAD  
D SALAMANCA**

Dissertation

**NATIONAL RECONSTRUCTION THROUGH TRUTH  
COMMISSIONS: TRANSITIONAL JUSTICE IN POST-  
CONFLICT COUNTRIES**

TUTOR: SOLEDAD MURILLO DE LA VEGA

AUTHOR: URBE SECADES GONZÁLEZ

UNIVERSITY OF SALAMANCA

JULY 2013

## TABLE OF CONTENTS

### I PART: REVISING THE LITERATURE

- Object and Justification.....page 2
- Introduction.....page 3
- What are Truth Commissions?.....page 4
- Truth.....page 7
- Transitional Justice.....page 9
  - Criminal Justice
  - Restorative Justice
- Reparation and Reconciliation.....page 12
- Power.....page 14

### II PART: ASPECTS FOR NATIONAL RECONSTRUCTION

- Introduction.....page 16
- Social Development
  - Collective memory.....page 17
  - Identity.....page 19
  - Education.....page 21
  - Victims' needs.....page 23
- Political Development
  - Peace-building.....page 24
  - Independence and transparency.....page 24
  - Media.....page 25
  - Leadership.....page 26
- Economic Development.....page 27
- Conclusion.....page 29

BIBLIOGRAPHY .....page 31

ANEX.....page 37

## **I PART: REVISING THE LITERATURE**

### **OBJECT AND JUSTIFICATION**

Sociology is the science that studies the origins, development, institutions and organization of societies. In other words, it studies the “logic” of a society. Therefore, when the “logic” of a society is broken and drastically transformed due to war, it is the task of sociologists along with other experts, to study the cases, reasons and facts that drove the armed conflict. Indeed, sociology is especially helpful because it helps to interpret the social structure as a network of relationships between actors who have to cede power to mutually develop democratic rules. The absence of social structure needs to be theoretically analyzed, understood and redefined so that they can be applied to social policy to help post-conflict societies get back to their non-violent reality. This paper aims to clarify and summarize the theoretical and practical complexities that surround post-conflict societies that have held a Truth Commission to deal with past atrocities. It further attempts to point key aspects that can help rebuild a broken nation.

The increasing number of Truth Commissions since the 1980’s of the past century has attracted the attention of the academia. There is extensive literature around the topics of transitional justice, Truth Commissions and trials, the process of democratization, reconciliation, victims and perpetrators etc. However, the literature tends to focus on the same issues dealing with the ambiguous effects of truth, morality, reconciliation, psychological consequences of armed conflicts, justice, leadership and political power, as the most common ones.

This paper mentions the importance of considering all these issues and the related theories (with their weaknesses and strengths) on the analysis. Moreover, it explores the contradictions and ambiguity that is present in the context of transitional processes where Truth Commissions are held. However, the aim of the paper is not to make a systemic summary of the most common arguments available in today’s literature. The aim is to highlight the issues that need to be taken in consideration, the aspects that need to be carefully addressed, in order to potentiate the likelihood of a successful transition through Truth Commissions towards national reconstruction based on democracy and long stable peace. I acknowledge these bodies have their limitations but, overall, I believe they are adequate mechanisms for addressing the atrocious past,

foster a common peaceful future and rebuild a broken nation. Therefore, aspects such as collective memory, identity, mediation and negotiation; transparency and the media are key aspects for Truth Commissions to make a real impact and success.

## INTRODUCTION

There are numerous countries whose population has experienced atrocious human rights violations due to an intrastate conflict between political forces, generally involving the state, different armed groups and civilians. The last decades of the XX century were particularly bloody with many cases reporting such atrocities in various continents: South and Central America (Guatemala, El Salvador, Peru or Chile among others), Africa (Rwanda, Sierra Leone or South Africa among others) and Asia (Cambodia, Sri Lanka and East Timor). Each conflict was due to specific reasons, involved different actors and developed differently. However, they all share the common fact of victims and perpetrators involved in intense violence that are willing to put the conflict behind and give way to a transition towards a stable democracy. The culture of “Never Again” has been spreading all over the world since the 1980’s when the first Truth Commissions were held in order to deal with heinous crimes against civilians.

There are many examples of democratic transitions after an internal conflict in a country, and the idea of justice lies at the core of such process. However, there are various ways of understanding justice. In this paper the attention will be given to the concept of transitional justice and not so much to other forms of retributive, restorative or distribute justice. Transitional justice is based on truth, justice and reparation, and contributes to the process of gradual shift from an authoritative violent regime to a peaceful new regime. Indeed, the focus will be narrowed to Truth Commissions as successful transitional mechanisms. The main argument here is that Truth Commissions, through participation and cooperation, help achieve the global truth of an atrocious past. Truth is the first step towards a strong democracy and a possible national reconciliation that would foster the ultimate goal of long-lasting peace. This process involves many actors whose connections with various factors affect the success or failure of the transition.

The paper is divided in two sections. The first part is a revision of the main literature about important issues when considering the debate here: Truth Commissions,

truth, justice, reparation and reconciliation, and power dynamics. In the second part, I will highlight the aspects that should be taken in consideration in order to foster the ultimate goal of long lasting peace. These aspects include collective memory, identity, victims' needs, education and development: social, political and economic. There is a final conclusion underlining the most relevant information of the paper.

## **WHAT ARE TRUTH COMMISSIONS?**

The rationale for Truth Commissions is that the inexplicable should be understood and it is based on figures of speech such as “moving forward” and “coming to terms with”. Truth Commissions are “official, temporary, non-judicial fact-finding bodies that investigate a pattern of abuses of human rights or humanitarian law, usually committed over a number of years” (Orentlicher 2005:6). These bodies are based on independence, impartiality and competence. They are generally created by the president of the country who appoints the commissioners and dictates the commission's mandate without consulting anyone but a set of close advisors. However, there are cases where these bodies were established by national legislature like in South Africa; or through negotiated peace accords like in El Salvador or in Guatemala, in which the International Community plays a more notable role.

The reasons to create a Truth Commission differ between countries but the most common ones are three: for national reconciliation and the need to deal with the open wounds of the past; as a step towards the prosecution that will follow the commission's report; and in order to distance the government's policies from the former regime, highlighting a new era of human rights dignity and respect (Hayner 2001). Following Hayner's (2001) classification, five main goals can be highlighted:

- Discover, clarify and formally acknowledge past abuses. This is the most important one as it narrows the range of permissible lies. This goal also lifts the denial about widely known but unspoken truths.
- Respond to specific needs of victims. Truth Commissions focus on victims and give them a voice that can help design the necessary reparation programs for those affected by the conflict.

- Contribute to justice and accountability. By identifying perpetrators, Truth Commissions can help prosecutions and moral sanctions.
- Outline institutional responsibility and recommend reforms. They are well positioned to give recommendations but the impact of such reforms depends on the interest and political will of those in power.
- Promote reconciliation and reduce conflict over the past. Reconciliation is not among the main goals of Truth Commissions but these bodies can help resolve disagreements and ease tensions. However, sometimes knowing the truth increases tensions. This ambiguous effect will be further discussed in the paper.

The management of Truth Commissions is crucial to its failure or success. Therefore, weak management, staff divisions, lack of resources or short funding can create serious problems. Indeed, one of the basic principles of these bodies is the allocation of adequate resources such as transparent funding and sufficient material and human resources to ensure that credibility and independence are never in doubt (Orentlicher 2005). The staff is formed by a wide range of human rights expertise including lawyers, investigators, activists, social workers, psychologists, computer and information-systems specialists, interpreters and security personnel. Most of them are usually national citizens of the country and the role of the international community varies among the different situations in which the Truth Commission is established. Generally, the staff is mixed with internationals and nationals working together like in Guatemala, Chile or Haiti. There are other examples where the commissioners were all internationals like in El Salvador, or all nationals like in South Africa (Popkin 2000). Levinson states that Truth Commissions should always include nationals at the commission and at the staff level because “the situation under investigation is considered too complex for outsiders or because the domestic qualified persons are sufficient for the needs” (2000: 220).

Victims are the central point of the whole process through Truth Commissions. On the 1985 Declaration of Justice for Victims, the United Nations defined victims in the broad sense “as persons who, individually or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental rights, through acts or omissions that are violations of national criminal laws or of internationally recognized norms relating to human rights” (UN ODCCP 1999:4). Despite this general definition, the specific context affects the



definition of the victim and the perpetrators because these multidimensional conflicts are not vertical but rather horizontal, thus victims might have possibly been perpetrators too, and vice versa. Therefore, the definition of victim is blurred and makes it difficult to find responsibilities, punishment and reparation (Rettberg 2005).

The testimonies can be held in public or in private. Some deponents prefer private hearings as they feel more secure and they fear violence for giving testimony. Others prefer public hearings in order to be heard and publicly acknowledge their suffering. The positive aspect of holding public hearing is that it helps the Truth Commission shift from product (the final report) to process, engaging the public as audience and encouraging press coverage as the public might be skeptical of inquiries behind closed doors (Levinson 2000). Sometimes, the interviews are held private for security or privacy reasons. However, private sessions do not help to the image of transparency that the Commission sustains. Whichever method applied, it is undoubted that the strength of civil society and its participation is crucial to the success of the Truth Commission. In addition to all the internal difficulties of a Truth Commission, the transitional process is also notably affected by outside factors such as the level of access to written records of the government and armed forces (and sometimes, foreign governments), the willingness of former perpetrators to cooperate or threats of possible violence and intimidation to testifying victims, the staff and commissionaires (Levinson 2000).

The success of Truth Commissions is particularly difficult to evaluate. Hayner (2001) considers three categories: a) as a process that engages the public in understanding the silence, that requires the participation of as many actors as possible and that is meant to be positive and supportive to the victims and survivors; b) as a product, which is the extent of the truth revealed in the final report; and c) as impact regarding the contribution of commission's work to long-term reconciliation, healing, reforms and recommendations' implementation. Indeed, the best measure is whether the conflict has restarted and whether there is institutional consolidation (Rettberg 2005). Other authors hold a rather relative position about the success, stating that the success of each Truth Commission should be judged on its own terms. They underline the widely different commission structures and powers, the particularities of each environment in which they operate, and the nature of the crimes they are to investigate (Brahm 2007).

From a qualitative perspective, Truth Commissions have ambiguous effects. They provide a platform where victims can go and share their stories; they are given a voice and recognition. Some victims feel released by talking about their personal experiences. However, there is the danger of retraumatization when giving testimony. Because of this chance of retraumatization, Truth Commissions are generally considered positive at the social level (on social cohesion) but rather negative at the individual level (they don't meet all the survivors' psychological needs). Moreover, there is empirical evidence showing the positive macro benefits of transitional justice in establishing a more respectful atmosphere towards human rights. The empirical evidence comes from the study done by Sikkink and Booth Walling (2007) who compared the human rights situation before and after the transitional processes in various countries. They concluded that trials and commissions improved the political situation in sixteen countries whereas in those countries where only trials were held or neither process took place, the political situation remained the same or worsened (Sikkink and Booth Walling 2007). This is shown in the tables 1, 2, 3 and 4 in the Anex.

Overall, Truth Commissions tend to be disappointing because their expectations are always greater than what these bodies can achieve in their short time of existence (from six months up to three years). They deal with thousands of victims, weak democratic institutions and unwillingness of some perpetrators to express remorse and forgiveness. Hence, this disappointment often overshadows the significant contributions these bodies achieve. But "if done well, Truth Commissions should hope to transform the history from a source of silent pain and conflict to a point of understanding and acknowledgment, so that the future is not continually hampered by an unresolved past" (Hayner 2001:254).

## **TRUTH**

*"You cannot forgive what you don't know"*

Archbishop Tutu

Truth telling is the number one duty of Truth Commissions but how much truth should they reveal? The truth-telling process is difficult and can have ambiguous

effects. Some believe it is necessary for the reconciliation and others believe it is not worth because it can dangerously revive memories of the conflict.

The right to know the truth about past events concerning various crimes and the circumstances that led to systemic violations is an inalienable right that should not be denied to anyone. As Orentlicher puts it, “irrespective of any legal proceedings, victims and their families have the imprescriptible right to know the truth about the circumstances in which violations took place and, in the event of death or disappearance, the victims’ fate” (2005:7). Moreover, knowing what happened and how it happened provides a vital safeguard against the reoccurrence of violations (Orentlicher 2005), if not societies are condemned to repeat the horror. Furthermore, without a certain idea of the identity of perpetrators and the nature of their involvement, appropriate sanctions will not be possible.

The opposing argument asserts that truth is too painful and would revive horrendous memories that might consequently revive the conflict. Hence, forgetting is considered a better option. Those in favor of this position assert that everyone has its own valid truth, so why should an “official truth” be imposed? And what kind of truth is being revealed? Because the extension of the crimes is so wide, varied and affected so many people, the Commission does not have enough resources (time, money and staff) to investigate it all so they have to examine a representative number of cases. The truth that is being investigated is accorded in the Commission’s mandate and is determined by the priorities of its leadership. Therefore, if the mandate is limited, so will be the truth which will inevitable omit some information.

All in all, truth-telling is generally considered more of a healing process than a counterproductive one. As, Bhargava (2000) put it, forgetting facilitates the reoccurrence of wrong acts because on one hand, it reinforces the loss of self-esteem and demoralization in the victims and, on the other hand, perpetrators grow in confidence as they get away with murder. Forgetting too quickly or without redress, haunts a society by its past. Therefore, “some forgetting at an appropriate time is necessary but a general sense of the wrong and evil acts must never recede from collective memory” (Bhargava 2000:54).

## **TRANSITIONAL JUSTICE**

Truth telling is important in transitional justice but is the full truth a form of justice? Justice lies at the core of Truth Commissions but it is a concept that can be understood in many ways. Retributive justice refers to trials, prosecutions and some sort of legal punishment in consequence for the damage caused. Distributive justice is often called social justice and is about the allocation of resources and the fairness of what people get (recognition, basic goods, rewards, money etc.). Restorative justice focuses on the victims' needs and its three pillars are harms and needs, obligation and engagement (Zehr 2002).

Truth Commissions fully engage the concept of transitional justice, based on truth, justice and reparation, and contributes to the process of gradual shift from an authoritative violent regime to a peaceful new regime. Transitional justice spans from retributive to restorative justice in the form of trials, purges and reparations that take place on the transition from one political regime to another (Elster 2004). It tries to clarify the identity and the destiny of the victims and the perpetrators; and it also helps design the ways in which a society will deal with its past crimes and the reparation necessity depending on the nature of the conflict, the specific conditions of the transition process itself and the international scenario in which it takes place (Rettberg 2005).

### **Criminal Justice**

Generally, justice is linked to the idea of punishment to wrong-doers. In the Western world, the current system of individualized, legalized responsibility is based on two assumptions: a) “responsibility of war crimes is principally a characteristic of individuals (...) rather than the states or national, ethnic or social groups to which they belong; and b) courts are the most appropriate institutions to deal with responsibility because other approaches to atrocity cannot offer sufficient robust protection of the innocent or punishment of the guilty” (Ainley 2011:410). Therefore, “it is seen as particularly valuable to hold individuals responsible for atrocity because in doing so supposedly breaks cycles of violence by isolating guilt to a few key perpetrators rather than entire groups” (Ainley 2011:413).

This retributive approach has been proved insufficient when it comes to mass human rights violations and the creation of a new nation through a just society. There are many reasons for trials' insufficiency in these cases. Firstly, in most countries where mass atrocities have happened, their justice system is highly dysfunctional and/or corrupt. Secondly, the government will never have enough resources to prosecute all the people involved in the crimes. It would be a time-consuming and expensive process that would only prosecute a small percentage of the total number of perpetrators. Thirdly, most victims are poor and cannot afford the services of an attorney or advocate and the number of victims is too high for any institution to provide the legal service for them. Fourthly, many political killings were perfectly lawful in terms of the country's laws at the time. Fifthly, it is usually the powerful who escape the consequences because political crimes committed by highly skilled operatives are difficult to prosecute. The powerful ones have resources and options to avoid prosecutions (they can flee the country, for example), thus justice will only affect the low ranking perpetrators that were subordinated to higher orders. Finally, prosecutions focus on the perpetrator and the crime but not on the victim or the reasons of the crime, thus it fails to honor individual dignity. Trials neither give an opportunity to regret and forgiveness nor do they provide measures for rehabilitation or reparation. Therefore, it cannot help rebuild the nation.

As Zyl states, "criminal justice systems are designed for societies in which the violation of the law is the exception and not the rule. Once the violation of the law becomes the rule, criminal justice systems simply cannot cope" (1999:661). In this sense, the arguments exposed before should not be mistaken. It is not that criminal justice is the wrong way to deal with human rights violations. It is certainly necessary and vital for preventing its reoccurrence again but it should not be seen as the only way to achieve justice. Where justice is unlikely in the courts, a commission plays an important role in recommending non-judicial sanctions against those named, such as banning from public positions, public shaming or taking away their right to bear arms (Hayner 2001).

### **Restorative justice**

Truth Commissions focus on restorative justice, which is survivor/victim centered. They achieve justice through accountability and societal repair, not

retribution. On one hand, this approach has been praised for being “moral, cultural, psychological and human rather than solely legal or instrumental” (Kiss 2000:80). As Rotberg states, “transitional justice includes truth as acknowledgment and justice as recognition, together providing a coherent alternative to retributive justice” (2000: 11). On the other hand, there are two big objections: firstly, pardon and amnesty are incompatible with the actual international law. Hence, if implemented in a transitional context, it would catch the International Criminal Court attention and could open investigations and process perpetrators as it has the competence to do so. Secondly, amnesty limits the victim’s rights and the State’s obligations in the human rights defense, which is counterproductive for potential forgiveness and reconciliation (Uprimmy & Saffon 2006). This is one of the paradoxes of Truth Commissions; as Zyl (1999) acknowledges: they aim to lay the foundation for the establishment of the rule of law but they often occur in contexts of amnesties, which represents a fundamental subversion to the rule of law.

The transition process is not independent of the political, social and economic context in which it is involved and which has to deal with. Therefore, the results in social and political changes require political negotiation and agreement between the different actors involved (Morales 2011). However, in order for perpetrators to reach an agreement, they need incentives such as amnesty and impunity. These processes are particularly fragile which is why special conditions are created beforehand in order to assure the goals and their stability in time. The milestone in transitional justice is to find a viable political solution that, without amnesty, will reach peace and reconciliation. In fact, there is always great tension between the two opposing forces of international judicial imperatives of punishment and the practical requirements of amnesty typical from transitional contexts (Uprimmy & Saffon 2006). It has to be acknowledged, though, that there are always some retributive elements in transitional justice for the head perpetrators of mass killings. As Uprimmy and Saffon (2005) state, retributive justice can complement transitional justice in post-conflict contexts but it can never substitute it.

Some authors like Martha Minow (2000) think that a society cannot forgive what it cannot punish. Others think that criminal justice is justly sacrificed for the sake of moral justice: for future reconciliation and enduring social harmony. In this sense, Boraine (2000) argues that deeply divided societies in which Truth Commissions

operate, cannot rely on punishment to heal and reconcile their several communities. Thus, national unity comes from understanding not revenge, reparation but not retaliation and humanness not victimization.

All in all, both approached to justice have their weaknesses and strengths but they are not mutually exclusive. The “either truth or justice” scheme must be avoided because Truth Commissions often contribute directly to judicial processes by identifying perpetrators and crimes. As David A. Croker asserts, “trials and commissions have supplementary roles in achieving the multiple goals of transitional justice” (2000:104). Therefore, hybrid systems (a mix of trials, amnesties and commissions) would be more efficient in deterring human rights abuses (Ainley 2011). In fact, there are studies that show the beneficial effects of transitional rituals from a qualitative (social effects on the victims and the nation) and quantitative (reoccurrence of human rights violations) perspective.

## **REPARATION AND RECONCILIATION**

Reconciliation is one of the hardest objectives for a broken society to achieve. It is a delicate, difficult and slow process. Kriesberg defines it as “the process of developing a mutual conciliatory accommodation between antagonistic or formerly antagonistic persons or groups. It often refers to a relatively amicable relationship, typically established after a rupture in the relationship involving one-sided or mutual infliction of extreme injury” (1998: 184). There is no specific formula for reconciliation because even among those who have suffered, there is often no consensus as to what is required to promote unity and healing (Zyl 1999). One thing is generally shared by experts: the key role of perpetrators in the reconciliation process. They hold much of the power in the transitional process because their apology or recognition of wrongdoing is one of the most important conditions for the reconciliation and reparation process to take place (Hamber 2007).

Reconciliation involves a range of macro and micro processes that includes “developing a shared vision of an interdependent and fair society; acknowledging and dealing with the past; building positive relationships; significant cultural and attitudinal change; and substantial social, economic, and political change” (Hamber & Kelly 2005:

18). Huyse (2003) argues that there are three stages to reconciliation: replacing fear by nonviolent coexistence; building confidence and trust; and moving towards empathy which needs to be accompanied by building democracy and a new socioeconomic order. Hayner (2001) mentions, as well, five factors that encourage reconciliation: an end to the violence or threat of violence; acknowledgment (to recognize one shared understanding of history and it should go beyond generalities or implied justifications); encourage development and reconstruction programs; time; and addressing structural inequalities and material needs because as Mamdani (1996) puts it, the beneficiaries' justice should be social justice.

Despite these different attempts to define reconciliation and its possible stages, it cannot be considered an absolute notion. It is not a universal concept because it is completely determined by the context. Charles Lerche points it out by asserting that “the political context, inevitably has an impact on the practice and consequences of truth-telling and, by implication, on its contribution to reconciliation” (2000: 7). The same idea is shared by Mahmood Mamdani who affirms that “reconciliation may be a moral imperative, but it will not happen unless it is also nurtured as a political possibility” (1996:5). This is visible in the different experiences Truth Commissions around the world. For example, South Africa successfully promoted reconciliation but it has never been assumed in Argentina.

Although reconciliation is not one of the main goals of Truth Commissions, these bodies are expected to lead the path towards reparation. The question is: national or individual reconciliation? Truth Commissions can only advance on national reconciliation which does not necessarily lead to individual reconciliation. The latter is a deeply personal process that differs in nature as much as the experiences of the victims do. However, a step forward can be reached: by clarifying the past with a global truth, myths and lies should not anymore obstruct potential debates between the opposing parties in order to govern together (Hayner 2001).

Concepts such as reconciliation or forgiveness which were originally considered individual processes, have gained political usage and are central to transitional processes. It needs to be clarified that reconciliation does not imply forgiveness as a prerequisite (Hamber 2007) although they are closely related. One reason is because forgiveness can be easily used by politicians to hide the truth about the past imposing a



“forgive and forget mentality” that will not help to the real reconciliation. This is what Ignatieff (1996) named “false reconciliation”.

## POWER

All the actors are directly affected by power dynamics and so are Truth Commissions which are not independent from domestic political restraints. In fact, Brahm (2007) talks about the difficulty to disentangle the Truth Commission from the political environment into which it is born. Although these bodies are totally independent, many authors believe that one of their big limitations is the political arena that restrains their actions: from the birth of the Truth Commission themselves to the release of the final report and the truth that is investigated. For example, Brahm (2004) assures that they are only considered when there is a need for compromise because all warring parties have some form of leverage or because a new government is forced to deal with a still-influential past regime. Therefore, if the conflict ends without clear or strong political transition, the idea of governmental investigation is rarely considered. Brody (2001), as well, states that Truth Commissions are increasingly seen by abusive governments as a soft option for avoiding justice. For the international community, too, Truth Commissions hold appeal because they represent a low-cost, “feel-good” solution to a potentially messy transitional state.

The establishment of Truth Commissions takes place when there is a balance of power, that is, when the relative strength of the conflicting demands is roughly equal (Skaar 1999). Such was the case in El Salvador where the civil war opposed the State with its military and paramilitary forces and the insurgency group Farabundo Martí National Liberation Front (FMLN). The U.S. was deeply involved in the conflict helping the Salvadorian government with military aid that totaled \$1.1 billion and economic aid up to \$3.15 billion between 1980 and 1991 (Zhu 2008). Thus, both sides were equally fearful of the consequences of trials and they embraced the idea of a Truth Commission. The detailed reached in the final report was surprising but it was backed by the sweeping amnesty that passed five days after the report’s release. Moreover, few of the recommendations have been undertaken since then.

The Truth Commission in Guatemala was established in a similar situation as it was the result of a three-way struggle for power between the government, the military and the Guatemalan National Revolutionary Unity (URNG). They were also avoiding prosecutions and trials due the history of extreme violence in the thirty-six year conflict. In fact, “the commission could attempt to achieve some sort of social accountability but it was forbidden to name any individual perpetrator, preventing any chances for punitive accountability” (Zhu 2008: 14). This illustrates the fact that the truth revealed is framed in the commission’s mandate appointed by the authorities.

The case in Peru is also a result from an intricate balance of power between the parties involved: the Fujimori government and the rebel group Sendero Luminoso. When Fujimori stepped down from power, the Paniagua government established the Truth Commission with a mandate to study the implication of both sides in the conflict. The Truth Commission took place because some perpetrators were still in power and feared prosecution process. However, the social and military elites were unable to deal with the accusations shown in the final report and they feared threats of prosecution. The civil society and human rights organizations, did not allow the attractive option of impunity.

In newly formed states arising from transitions of independence the likelihood of establishing a Truth Commission is lower due to their lack of experience, influence and weakness (Zhu, 2008). This was the case of East Timor where the Truth Commission was created by a legal act of the United Nations and accepted because of the fear of an international tribunal. Its mandate was determined by UNTAET’s Human Rights Unit, leaving no place for blanket amnesty or non-investigation.

It is remarkable that, in the cases mentioned here, Truth Commission always emerged as the last option standing and where compromise was necessary for moving forward with transitional justice. Consequently, Zhu suggests that “the options available to a state after a civil conflict may be limited by the domestic power dynamics” (2008:26) and Truth Commissions rank low on the ideal options for government and rebel negotiators. There is a need to first understand what could work and then move further into what works best for a particular country with particular circumstances.

## II PART: ASPECTS FOR NATIONAL RECONSTRUCTION

### INTRODUCTION

Despite all the debate and theoretical discussions about the effectiveness of Truth Commissions and the different views on the issues mentioned, I believe these bodies can go further than just releasing a final report, as important as these are. Reparation is the only way a society can get back to non-violent reality and although it is a hard task to work on, it can be successfully achieved through various mechanisms. This is not to deny the fact that conflict is driven by a wide variety of factors that can interact differently in different settings, including: inability to perform state functions, exclusionary practices by the state, arbitrary governance or external difficulties, among others (Lockhart & Vincent 2013).

As Lockhart and Vincent (2013) acknowledge, there have been various attempts to categorize conflict by its source: countries in which separatist movements have arisen within multi-ethnic states (as in Yugoslavia and Ethiopia), countries suffering persistent conflict (Democratic Republic of Congo or Somalia), and state repression to quell dissident movements (El Salvador, Guatemala or Sudan). It is also important to distinguish between factors that can produce conflict and factors that can sustain existing conflict. However, typologies are rather difficult because conflict is a multi-dimensional phenomenon. Therefore, each country faces different challenges, which calls for a context-specific approach that takes into account “the history, context and citizens’ aspirations of any society seeking to overcome its past” (Lockhart & Vincent 2013:44).

Contemporary armed conflicts are extremely complex; hence the peace strategy must be multidimensional. It must begin with awareness that the peace agreement has not created peace but, rather, only a new set of opportunities that can be grasped or thrown away (Rothstein 1999). In fact, as Amnesty International puts it, “although there may be different forms of accountability, there is only one kind of justice: the one based on the respect, protection and promotion of the right of victims to justice, truth and full reparations” (Amnesty International, 2010:31)

The transition from war to peace involves complex processes “marked by the need to establish basic security (including disarmament and demobilization), protect the most vulnerable war victims, reintegrate displaced populations, rehabilitate basic infrastructure and productive assets, stabilize the economy, promote transparent and accountable government, restore social capital, and strengthen civil society” (The World Bank 1997:iii). Despite all the particularities of each post-conflict society, I will highlight a set of aspects to be considered in future transitional processes, through Truth Commissions, for the nation’s reconstruction. These aspects are included in the different levels of development because development is seen as a key factor to foster long lasting peace, security and justice: social development (collective memory, identity, education and victims’ needs); political development (peace-building, independence and transparency, independent media and leadership) and economic development beyond aid programs. These aspects are considered to help achieve long lasting peace for societies coming out of an atrocious collective experience of systemic human rights violations.

## **DEVELOPMENT**

*“Peace and development are intrinsically linked: one cannot be achieved if the other fails”*

Jan Pronk, Former Dutch Minister for Development Cooperation (UNHCR 1996)

*“Development makes everyone more secure”*

UN 2004

## **SOCIAL DEVELOPMENT**

### **1. COLLECTIVE MEMORY**

Following a symbolic interactionism point of view, there is no such thing as one reality but many ways of interpreting the facts that happen. People construct meanings attached to their reality that helps them understand it. Hence, “conflict is connected to meaning, meaning to knowledge, and knowledge is rooted in culture” (Lederach 1995:8). In this sense, conflicts do not just happen to people, people are active participant in creating situations and interactions they experience as conflict. From one perspective, military regimes express a special kind of institutional reaction that the powerful sectors, along with the help of the Military Forces, carry out in order to repress

and/or stop the emergent social and political movements that request changes in the system. From another perspective, military regimes are conceived as a necessary social answer to control the social chaos that the insurgent sectors create by demanding structural reforms (Durán Pérez et al. 2001). These two different perspectives prove what Lederach (1995) wrote about how people from different cultural settings develop different ways of creating, expressing, interpreting and handling conflict.

Truth of personal and collective experiences are various indeed, therefore, the process of building a new political culture involves what has been called the “reconciliation of memories”. If common memory is lacking and people do not share the same past, there cannot be real community and, thus, no options of reconstructing the nation. As H. Richard Niebuhr once stated: “where community is to be formed common memory must be created (...) and the measure of our unity is the extent of our common memory” (1941:64).

In order to understand collective memory, it is necessary to clarify the concept of collective violence. It needs to be highlighted that these kind of violent social explosions are not spontaneous social phenomena but rather highly organized and ideologically motivated acts. Moreover, war is not caused by aggressive tendencies of human beings because most of the people involved are acting forcedly or obliged by the circumstances. Collective violence is carried out by people that kill collectively, usually following institutional orders (Ubillos et al. 2011:20).

**TABLE 1. Socio-cognitive processes of social aggression**

| <b>Individually</b>                       | <b>Collectively</b>  |
|---|--|
| Moral justification                       | Threatened political organization  |
| Psychological distance and delegitimizing | Marginalization of ideological groups  |
| Individual perpetrators                   | War alliances. Political elites know they will be unlikely prosecuted for their crimes |

(2011:23)

These socio-cognitive processes are key to understand the vicious cycle of violence. Once the victim is demoralized and humanly devaluated, there is an inversion of morality and the perpetrators can perceive the killing as a right or a moral obligation

(Ubillos et al. 2011). There is an urgent need to redefine moral concepts and restore the respect for basic human rights.

It has been studied that those countries with higher percentage of collective violence, are more inclined to avoid uncertainty and those with high fear of uncertainty express higher levels of social anxiety (Hofstede 2001). Therefore, in order to reduce uncertainty and social anxiety, collective memory plays an important role. It is a difficult task that has to be carefully managed; otherwise it might boost the conflict again with a newer cycle of violence where the wounds of the past justify the atrocities of the future (Licata et al. 2011). Collective memory is defined as “shared representations of the past based on a common identity of the members of a group” (Licata & Klein 2005:243). It is a social development and communication activity.

Most of the actual conceptions about collective memory are related to Maurice Halbwachs. He believes that “the mind reconstructs its memories under the pressure of society” (Halbwachs 1992:51). Therefore, individual memory cannot be disentangled from society, “as soon as we locate people in society it is no longer possible to distinguish two types of observations, one exterior, the other interior” (1992:169). Individual memory is formed by the groups to which the individual belongs, more specifically, by the social practices of the specific groups to which it is a member. Moreover, he affirms that the particular representations of the past are shared by the collectivity and are constantly being updated through collective practices or rituals. Each social group has their own collective memory which is not homogeneously shared by the whole of the society. As he puts it “our recollections, each taken in itself, belong to everybody; but the coherence or arrangement of our recollections belongs only to ourselves. (...) The chief question is to know whether what is true of each of the parts is also true of the whole (Halbwachs 1992:171).

## 2. IDENTITY

*“You make peace with your enemies”*

*Yogi Berra*

Collective memory is particularly linked to identity. In fact, collective memory has four basic identity functions: a) it *defines identity* in a narrative way as it

provides the population with discourses on who they are, where they come from and where to go. The fact that it is shared helps build cohesion to the group; b) it *defines the value* of the group identity. According to Social Identity Theory, the value of the group is measured in comparison with the other groups which constrain or increase the group's self-esteem (Turner 1985). Therefore, the past becomes a negotiation within groups and between groups; c) *justification of the group's acts*; and d) *collective mobilization* as the past is an effective rhetorical resource for politicians to mobilize a collectivity (Licata et al. 2011:360).

The self-concept, which is largely relational and comparative (Turner 1985), is comprised of social and personal identity. Social identity, differing from personal identity, is defined as the part of the self that derives from group belonging. According to Social Identity Theory, the individual identifies with social categories partly to enhance self-esteem. In situations where self-esteem of each individual and each social group has been broken because of conflict, truth-telling is the first way to start reconstructing the identity. Therefore, Truth Commissions have to take in consideration these broken identities and the aspirations of the civilians to restore and reconstruct them.

Turner (1984) proposed the existence of a “psychological group” which is defined as “a collection of people who share the same social identification or define themselves in terms of the same social category membership”. However, a member of a “psychological group” does not need to interact with or like other members, or be like and accepted by them. Thus, Turner (1985) affirms that a psychological group is far more than an extension of interpersonal relationships: identification with a collectivity can arise even in the absence of interpersonal cohesion, similarity or interaction and yet have a powerful impact on affect and behavior. It is important for victims to leave that identity behind and move forwards until they perceive themselves as normal citizens in full right (Beristain 2006).

Truth Commissions do not work on creating a collective identity. That is not a task within their mandate. However, the truth-telling process they work on helps the path to a future based on a reconstructed common identity. It is in this sense that “restitution dialogue” works. Because “dialogue that focuses on mutual recognition of the identities and perceived histories of the protagonists, transcends exclusionary

identities and provides a prudent way to affirm both the principles of individual human rights and new group rights” (Barkan 2000:319). Restitution aims to provide a mechanism for negotiating rivalries and recognizing identities rather than ignore them. As Barkan puts it, “restitution bridges the moral separation between international arena and domestic multiculturalism (...). The dialogue of restitution brings new pluralistic perspectives of the national historic and current identity into public view and thus redefines the nation” (2000:321). However, it cannot be considered a solution or a standard as it is rather a process, an ideology.

In this sense, in post-conflict situations, people are sometimes required to leave apart some of their personal identity in order to foster a social identity and boost a common future with the other members of society. This goes along with the utilitarian perspective which strives to maximize the good of the society. However, this notion is opposed by neo-Enlightenment theorists, who reject the notion of a general global moral system and recognize instead that only voluntary local resolutions can provide tentative solutions (Barkan 2000). One of the most influential authors in this liberal perspective is John Rawls. According to him, individual rights are viewed as prior and superior to the common good and cannot be sacrificed under any circumstances (Rawls 1971). Nevertheless, as Barkan highlights, “the challenge facing contemporary politics is to incorporate both group identity and individualism in a global morality” (2000: 314).

### **3. EDUCATION**

Education is the key aspect for every society to develop. It makes a nation stronger and broadens people’s opportunities. Thus, it is a key aspect of peacemaking. As Curle (1971) asserts, education, advocacy and mediation are the three key peacemaking functions and they all share the same goal of restructuring unpeaceful relationships. Education or conscientization erases ignorance, restores equity and is needed when the conflict is hidden and people are unaware of the injustices. For example, in Guatemala, surveys have shown that many Guatemalans perceive that human rights issues do not benefit them but the wrong people: the criminals. Furthermore, coinciding with this public distrust of human rights activism is a resurgence of authoritarian elements (Azpuru 2006: 123). This example illustrates the need to assist with educational programs and that is why there is the Culture of Peace



program by UNESCO to assist Guatemala into a culture of mutual respect and peace. It was first developed in 2000 and introduced human rights, democracy and social justice education into school curricula (Azpuru 2006:111). In Chile, in order to foster a culture respectful with human rights, the Cultural Promotion and Education Department was created, offering numerous courses, workshops and activities for the formation of teachers of all educational level in human rights knowledge (Durán Pérez et al. 2001).

In Sierra Leone, on the contrary, there is no human rights education in schools. That task is left to the local organizations that try to provide this education through radio, posters, handbooks and community meetings. However, with few people owning a radio, illiteracy at 70% of the population and the presence of local organizations limited to towns, human rights' education has not reached the majority of Sierra Leoneans who live in rural areas (Sesay & Hughes 2006).

The different collective believes, attitudes and emotions created during the conflict affect the whole population. They are used to control and justify the conflictive situation and are expressed and perpetuated through communication, thus creating a culture of violence in which all the generations affect by the conflict are socialized (Rosen et al. 2011). Respect for human rights is the basis for reconciliation and a more democratic future. Indeed, holistic peace educational approaches should be prioritized as they “reconstruct almost all of the social relations (...) and its ultimate goal is to avoid all the aspects of direct and indirect violence” (Ben-Porath 2006:65). This approaches deal with the understanding of the power asymmetries, inequalities and cooperation, the history of the conflict and the conflict itself as well as the peace process. There would also be education on the collective memory, the importance of human rights, in-group identity of marginalized groups, the perception of the other side (the enemy) on the conflict, the need for empathy and trust and fostering critical thought (Rosen et al. 2011). In other words, peace education is an important socialization for reconciliation, thus the knowledge transmitted has to be coherent with the country's reconciliation objectives. For this education goal to become real the political and governmental support is essential.

#### 4. VICTIMS' NEEDS

The civilian population represents the gross of the victims. The victims form an heterogeneous group of different ages, classes, ethnicities and communities, each with their own story and experience on the conflict; each with their own traditions, rituals and symbolic conceptions of community. This social heterogeneity can suffer disproportionately during the conflict and may have different ways of getting over the atrocities experienced. Hence, victims' needs are very diverse. Nevertheless, compensations, psychological support and security are key ingredients to foster cooperation and reconciliation. The recommendations of the Commission for Historical Clarification (CEH) in Guatemala, included both individual and collective forms of reparation, economic compensation for the most serious injuries or losses, measures for psychological rehabilitation and reparations, and steps to restore individual dignity (Popkin 2000).

The South African Truth and Reconciliation Commission (TRC) proposed various forms of monetary and moral reparation. Victims in dire need were to be urgently provided with access to services and facilities. The TRC recommended that each victim of a gross human rights violation receive a financial grant to be paid over a six-year period. Moreover, the commission had symbolic reparation measures to facilitate the communal process of remembering and commemorating the victims of the past. These include a national day of remembrance, the construction of memorials and monuments and the development of museums. Other recommendations included community rehabilitation programs to promote healing and recovery of individuals and communities affected (Popkin 2000). The situation in South Africa seemed more favorable given that the ANC, which formerly represented the majority of the victims, was the ruling party. However, as Popkin (2000) asserts, there was a bitter debate about the recommendations: some insisted in rather individualized reparations policies while others insisted that all victims should be treated equally.

Most of the victims' needs are psychologically centered: helping them to speak up and overcome their trauma. In South Africa the Kulumani victims' support group was created to assist the survivors that were going to participate in the TRC. The aim was to help them speak about their stories and psychologically heal them by sharing their experiences (Beristain 2006).

## **POLITICAL DEVELOPMENT**

### **1. PEACE-BUILDING**

Peace-building is defined as an “action undertaken at the end of a civil conflict to consolidate peace and prevent reoccurrence of fighting” (Paris 2004:38) and it is not just a way of getting rid of an undesirable situation such a conflict. The goal is to generate “continuous, dynamic, self-regenerating processes that maintain form over time and are able to adapt to environmental changes” (Lederach 1997:84). Peace building resources include financial support, material support and socio-cultural resources (including people).

Conflicts nowadays differ from those before the Cold War. Contemporary armed conflicts are not anymore international or interstate conflicts but rather intrastate. Therefore, these conflicts are more sustained by psychological or cultural factors than by substantive issues. They also tend to be long-standing conflicts. Thus, peace building which used to be adjusted to the old wars between States is redeveloping towards different methods to deal better with these new characteristics. Lederach (1997) calls for a shift from traditional diplomacy with top-level leaders and short-terms objectives to integrated approaches emphasizing multiple levels of actors, long-term objectives and the healing of relationships and people. Hence, conflict resolution training has to become what the author calls “transformative training” which seeks to assess coordination between various actors and level, to assess the responsiveness to the interventions to the context of the conflict, and to identify long-term and provisional goals. Thus, peace building nowadays faces many challenges of which the following are highlighted: its approaches must take a very long-term view and a broader, more comprehensive perspective of the people and contexts which produce conflict in order to build enduring peace. Peace building also has to prevent the escalation of minor conflicts into open warfare (Lederach 1997).

### **2. INDEPENDENCE AND TRANSPARENCY**

There is a common conclusion about fostering political development that Rothstein (1999) highlights: the necessity of a politics of accommodation between the new democracy and its supporters and the still powerful forces of the old regime. In

order to do so, “a confrontational zero-sum perspective must be replaced by an acceptance of the need for (initially asymmetric) shared gains and an awareness of linked fates” (Rothstein 1999:230). Moreover, the initial security dilemma situation has to be replaced by an emphasis on confidence-building measures. In this learning process, communication and cooperation must be enhanced to generate a cross-group elite unity. The goal is to make all the parties involved share the conviction that the other side can be trusted and that there are greater mutual benefits in cooperation than in seeking to deceive. However, in this learning process good faith should not be taken for granted (Rothstein 1999). Peace agreements between communities in a single state become rather easier because of power sharing; the desire for voters and support across group lines gives leaders a strong incentive to pay attention to bottom-up demands.

In order to foster political development, grassroots civil society organizations should be made a priority. More attention should be devoted on capacity building of membership-based civil society organizations, not only in the national and provincial capitals but also in rural areas (Zeeuv & Goor 2006). Moreover, democracy promotion programs require a functioning state bureaucracy. Indeed, “all post-conflict societies require well-trained and well-managed electoral administration to hold free and fair elections, professionally trained law enforcement agencies and regulatory agencies to ensure fair access to electronic media” (Zeeuv & Goor 2006:283).

### **3. MEDIA**

Creating free independent media is also crucial for political development. The media have an essential role in rebuilding civil society. As Rothstein (1999) asserts the mere mass media images, although they are not enough, they are important to convince many citizens to change their minds about their antagonists. Moreover, “the media are an essential part of the healing process by making available space or air time for expression of grievances and can serve to empower groups that had previously been voiceless” (Reychler & Paffenholz 2001:306). This was the case in South Africa where the testimonies of the Truth and Reconciliation Commission were held in public and broadcasted in television and radio. Indeed, The Truth Commission Special Report, an hour-long Sunday night television show, had the largest audience of all South African

news or current affairs shows. Uganda is another example of where all the interviews were made public and broadcasted live on the radio and television.

Media coverage is also important for political development. Freedom of speech is a human right and it is often used as an indicator of a country's democratic level. However, freedom of speech can be used to either boost a conflict (hate media) or ease tensions (peace media). Hate media can be defined as "encouraging violent activities, tension or hatred between races, ethnic or social groups, or countries for political goals and/or to foster conflict by offering one-sided or biased view or opinion" (Reychler & Paffenholz 2001: 304). Hate media played a key role in the Rwandan genocide. The extremist radio station RTLM (Radio Télévision Libre des Mille Collines) often made explicit calls to the Hutu to participate in the killings. At one point it announced "You have missed some of the enemies in this or that place. Some are still alive. You must go back there and finish them off. The graves are not yet quite full" (Prunier 1995:20). As a result, public trust in the media was severely damaged.

On the other hand, peace media is defined as "promoting peaceful conditions of life and resolution of conflict, or countering hate media by presenting issues fairly, offering alternative sources of information mitigating messages of hate media" (Reychler & Paffenholz 2011:306). In fact, to promote journalistic solidarity in Rwanda, UNESCO had the idea of Press House, a place where media professionals could meet. However, the project failed due to lack of funds and sustainability (Kayumba & Kimonyo 2006). Indeed, an independent media sector can serve as a watchdog, exerting political pressure to democratic reform. Moreover, conflict situation often attract the media with images of the tragedies which can facilitate large inflows of international financial and technical assistance (Del Castillo 2008). Nevertheless, for these to be real there are many problems to overcome such as repression, limited access, high costs, fragmentation and limitations of print media, among others (Kayumba & Kimonyo 2006).

#### **4. LEADERSHIP**

The government's reaction about the final report of the Truth Commission is a key moment that influences the country's environment and the future path dealing with recommendations. In order to foster democracy, trust in the State institutions, the rule of law and security, the Government has to approve and promote the final report. There

have been many reactions in this respect. Generally, governments approve the final report when there are no names of perpetrators and only the violent acts are revealed. Such was the case for the Guatemala's HCC, the Chilean Rettig Commission. In both countries, the respective Presidents apologized in the name of the government for the actions of state agents, asking pardon for them and assuming responsibility.

However, in countries where names of perpetrators appeared in the final report, the governments' reaction was rather negative and defensive. Once the Salvadoran government became aware of some of the names that were likely included in the report, it launched a diplomatic offensive to try to convince the commission not to name individuals. When the report came out with names, President Cristiani, the Supreme Court and many other important leaders voiced their dissatisfaction with the Commission's report calling it "biased, incomplete, unfair, totally unacceptable" (Popkin 2000:121). Furthermore, the government made no effort to distribute the report and seven years later, the report was not widely available or read. Similarly but on a smaller scale was the ANC's attempt in South Africa to block the publication of the TRC because some of its leaders were found responsible for serious human rights violations.

Effective leadership is a crucial aspect of conflict transformation and reconciliation. All kinds of leadership including middle-level and grassroots are important but the top-level has the major role. They have a high status, power and authority, thus, have immense potential and influence to change things (Lederach 1997).

## **ECONOMIC DEVELOPMENT**

Economic justice and equity is a fundamental aspect of reconciliation (Beristain 2006). Economic reconstruction is understood here in a broad sense that includes rehabilitation of basic services, rebuilding of physical and human infrastructure, stabilization and structural reform policies, as well as microeconomic foundations required to create a market economy and reactive investment and broad-based economic growth. These foundations include an appropriate business climate, adequate financing and infrastructure for the private sector, an effective bureaucracy and an appropriate legal, regulatory and institutional framework (Del Castillo 2008)

It has recently been found that “on average a country that experienced major violence over the period 1981 to 2005 has a poverty rate 21 percentage points higher than a country that saw no violence” (Lockhart & Vincent 2013:11). This illustrates how the peace and economy are intrinsically linked. Despite all the particularities of each conflict and each country, there are a number of characteristics of post-conflict economic reconstruction that Del Castillo (2008) enumerates: a) devastated human capital and physical infrastructure; b) corruption, lack of transparency, inadequate protection of property rights, incompetent central bank and weak tax administration, among others; c) high dependency on official aid flows, specially at the early stages of the transition; d) protracted arrears on payments of foreign debt and the need to normalize relations with creditors; and e) training, capacity and institutional building, and job-generating activities should be prioritized. In other words the common requirement for economic reconstruction is return of peace, the rule of law and acceptance of the new government and state bodies (Del Castillo 2008). As well, enduring peace is highly dependent on the creation of jobs and the stabilization and growth of the country’s economy.

Economic development in post-conflict situations includes short-term objectives such as employment creation, but also long-term objectives including poverty reduction, sustainable growth and environmental protection. This economic reconstruction in the aftermath of war is particularly difficult because it has to integrate the economic objectives with the peace process dealing with the “peace dividend” and a totally broken structure. The “peace dividend” refers to the aid and humanitarian assistance related to the peace process that is generally given by the international community. Consequently, this international financial assistance goes in hand with intensive (and sometimes intrusive) political involvement by the international community in the countries’ internal affairs. In some cases, “such aid specially includes military and police assistance, since an improvement of the security situation is often imperative before starting reconstruction and the reactivation of economic growth” (Del Castillo 2008:35).

However, aid should be channeled through the government to support a national integrated reconstruction strategy and the assistance should not be extended too long, otherwise it will discourage work and act against efforts of national empowerment (USIP 2011). Furthermore, as Del Castillo (2008) clarifies, even though economic

development is key to the peace process, if a conflict arises between the political and economic objectives, the former one should be the priority at all times.

## CONCLUSION

Fisher states that “while conflicts may start because of ‘objective and ideological differences’ the dynamics of escalation result from such subjective factors as (...) misperceptions, mistrust, and frustrated basic needs” (1999:85). This is precisely the strength and the importance of Truth Commission in post-conflict situations. These bodies clarify the violence occurred in the past to avoid myths and silence, and a potential reoccurrence of the conflict due to ignorance about the factors that drove it. Truth Commission are indeed restrained by their mandate, the country’s power dynamics and an atmosphere of uncertainty and fear but they open the way to the whole process of national reconstruction and unity that will help foster a democratic future. Truth Commissions have the tools to provide the recommendations needed to reach the ultimate goal of long-lasting peace. It is left to the political responsibility to implement them in a progressive inclusive way. Leadership is a key factor to apply the necessary peace-building methods through independent and transparent policies.

The culture of peace will depend on a wide range of socio-structural, political and cultural factors that include: education on peaceful conflict resolution, cooperation and mutual care; minority acceptance through tolerance and social solidarity; general respect of human rights; sustainable economic development (decreasing social and economic differences between communities and fostering economic justice); political participation; freedom of expression and independent media; stable peace and security. These are the key ingredients to reconstruct a post-conflict society and avoid reoccurrence of violence. Time by itself does not bring reconciliation but the reconciliation process needs a lot of time: decades or even generations.



The following table summarizes the transitions that must take place to shift from conflict and fragility to stability:

| <b>Multiple Transitions from conflict/fragility to stability</b> |  |
|--|--|
| <i>From</i>  | <i>To</i>  |
| Conflict   | - Politics and security  |
| Charisma   | - Management and institutional accountability                          |
| Opaqueness   | - Transparent management of public finances                            |
| Absence of service delivery                                      | - Nurturing human capital  |
| Oppositional identities  | - Citizenship rights and formation of a civil society                  |
| Destruction  | - Creation of infrastructure   |
| Subsistence and war economy                                      | - Market economy   |
| Diversion and privatisation of state assets                      | - Creation of public value   |
| Marginalisation and illegitimacy                                 | - Assuming responsibilities as a member of the international community |
| Rule of the gun  | - Rule of law  |

*Carnahan, Ghani and Lockhart, 2006. En Lockart & Vincent 2013:12.*

## BIBLIOGRAPHY

Ainley, Kirsten (2011): “Excesses of Responsibility: The Limits of Law and the Possibilities of Politics”. In *Ethics and International Affairs*, 25 (4): 407-431.

Amnesty International (2010): *International Criminal Court. Making the Right Choices at the Review Conference*. Available at

<http://www.amnesty.org/es/library/asset/IOR40/008/2010/es/faad9888-c9fb-425a-98bc-fcce1d5e075f/ior400082010en.pdf>

Azpuru, Dinorah (2006): “Strengthening Human Rights in Guatemala”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen and Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers.

Barkan, Elazar (2000): *The Guilt of Nations: Restitution and Negotiating Historical Injustices*. Baltimore: John Hopkins University Press

Ben-Porath, Sigal R. (2006): *Citizenship under fire: Democratic education in times of conflict*. Princeton: Princeton University Press.

Beristain, Carlos Martín (2006): “Reconciliación Luego de Conflictos Violentos: Un Marco Teórico”. En *Verdad, Justicia y Reparación. Desafíos Para la Democracia y la Convivencia Social*. San José: IIDH-IDEA.

Bhargava, Rajeev (2000): “Restoring Decency to Barbaric Societies”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Boraine, Alex (2000): “Truth and Reconciliation in South Africa: The Third Way”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Brahm, Eric (2004): “Getting to the Bottom of the Truth: Evaluating the Contribution of Truth Commission to Post Conflict Societies”. Page 26. Presented at the Wisconsin institute for Peace and Conflict Studies 20<sup>th</sup> Annual Conference “Challenges and Paths to Justice”, Marquette Univeristy, Milwaukee, Wisconsin, October 6-8 2004.

Brahm, Eric (2007): “Uncovering the Truth: Examining Truth Commissions Success and Impact”. In *International Studies Perspectives* (8):16-35

Brody, Reed (2001): "Justice: The First Casualty of Truth?" *The Nation*. Available at <http://www.thenation.com/article/justice-first-casualty-truth#axzz2X9JZo735>

Burg, Steven L. (1950): *War or Peace? Nationalism, Democracy and American Foreign Policy in Post-Communist Europe*. New York: New York University Press.

Chapman, Audrey R. and Patrick Ball (2001): "The Truth of Truth Commissions: Comparative Lessons from Haiti, South Africa, and Guatemala". In *Human Rights Quarterly* 23:1–43.

Crocker, David A. (2000): "Truth Commissions, Transitional Justice and Civil Society". In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Curle, Adam (1971): *Making Peace*. California: Tavistock Publications.

Del Castillo, Graciana (2008): *Rebuilding War-Torn States. The Challenge of Post-Conflict Economic Reconstruction*. Oxford: Oxford University Press.

Durán Pérez, Teresa, Roberta Bacic Herzfeld and Pau Pérez Sales (2001): "Muerte y Desaparición Forzada en la Araucanía: Una Aproximación Étnica". En *Ko'ãga Roñe'etã*, serie X Libros. Available at [http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/analisis\\_desaparicion/b/contentFile/s/Perez-Sales-Muerte\\_y\\_Desaparicion\\_Forzada.pdf](http://www.pparg.org/pparg/documentos/represion/analisis_desaparicion/b/contentFile/s/Perez-Sales-Muerte_y_Desaparicion_Forzada.pdf)

Elster, Jon (2004): *Closing the Books. Transitional Justice in Historical Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press.

Fisher, Ronald J. (1999): "Social-Psychological Processes in Interactive Conflict Analysis and Reconciliation." In Howon Jeong, ed., *The New Agenda for Peace Research*. Ashgate: Aldershot.

Halbwachs, Maurice (1992): *On Collective Memory*. London: The University of Chicago Press.

Hamber, Brandon and Grainne Kelly (2005): *A Place for Reconciliation? Conflict and Locality in Northern Ireland* (Report No. 18). Belfast, Northern Ireland: Democratic Dialogue.

Hamber, Brandon (2007): “Forgiveness and Reconciliation: Paradise Lost or Pragmatism?” In *Journal of Peace Psychology*, 13 (1): 115-125.

Hayner, Priscilla B. (2001): *Unspeakable Truths: Facing the Challenge of Truth Commissions*. New York: Routledge.

Hofstede, Geert H. (2001): *Culture's Consequences*. Second Edition. Thousand Oaks, California: Sage.

Huyse, Luc (2003): “The Process of Reconciliation”. In Bloomfield, David, Teresa Barnes and Luc Huyse (Eds.), *Reconciliation after violent conflict: A handbook*. Stockholm, Sweden: International Institute for Democracy and Electoral Assistance.

Ignatieff, Michael (1996): “Articles of Faith”. In *Index on Censorship*, 25(5), 110–122.

Kayumba, Christopher and Jean Paul Kimonyo (2006): “Media Assistance to Postgenocide Rwanda”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen and Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Kiss, Elizabeth (2000): “Moral Ambition Within and Beyond Political Constraints: Reflections on Restorative Justice”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Kriesberg, Louis (1998): “Coexistence and the Reconciliation of Communal Conflicts”. In Eugene Wenrier (ed.), *The Handbook of Interethnic Coexistence*. New York: The Continuum Publishing Company

Mamdani, Mahmood (1996): “Reconciliation Without Justice”. In *South African Review of Books* (46): 3-5. Available at [http://web.uct.ac.za/depts/sarb/X0045\\_Mamdani.html](http://web.uct.ac.za/depts/sarb/X0045_Mamdani.html)

Minow, Martha (2000): “The Hope for Healing: What Can Truth Commissions Do?”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert. I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Morales, Jenny Juliet (2011): Aproximación a la Justicia Transicional: Interrogantes Sobre su Aplicabilidad en Colombia. In *Diálogos de Derecho y Política*, 7 (2):1-14

Niebuhr, Helmut Richard (1941): *The Meaning of Revelation*. Westminster: The Macmillan Company

Lederach, John Paul. (1995): *Preparing for Peace: Conflict Transformation Across Cultures*. New York: Syracuse University Press

Lederach, John Paul (1997):. *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. New York: United States Institute of Peace Press

Lerche, Charles (2000): “Peace Building Through Reconciliation”. In *The International Journal of Peace Studies*, 5 (2). Available at [http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol5\\_2/lerche.htm](http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol5_2/lerche.htm)

Levinson, Standford (2000): “Trials, Commissions and Investigating Committees: The Elusive Search for Norms of Due Process”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press

Licata, Laurent and Oliver Klein (2005): “Regards croisés sur un passé commun: anciens colonisés et anciens coloniaux face à l'action belge au Congo”. In *L'Autre: regards psychosociaux*. Eds: Sánchez-Mazas, Margarita and Laurent Licata. Grenoble: Presses Universitaires de Grenoble.

Licata, Laurent, Oliver Klein, Raphaël Gély, Elena Zubieta y Alejandra Alarcón Henríquez (2011): “Memoria de Conflictos, Conflictos de Memoria: Un Abordaje Psicosocial y Filosófico del Rol de la Memoria Colectiva en los Procesos de Reconciliación Intergrupala”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro.; Nekane Basabe and Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Lockhart, Clare and Sam Vincent (2013): *Ending Extreme Poverty in Fragile and Conflict-affected Situations*. Submitted to the High Level Panel on the Post-2015 Development Agenda. Available at [http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Lockhart-Vincent\\_Ending-Extreme-Poverty-in-Fragile-and-Conflict-affected-Situations.pdf](http://www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/Lockhart-Vincent_Ending-Extreme-Poverty-in-Fragile-and-Conflict-affected-Situations.pdf)

Orentlicher, Diane (2005): *Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights Through Action to Combat Impunity*. UN Doc. E/CN.4/2005/102/Add.

Paris, Roland (2004): *At War's End. Building Peace After Civil Conflict*. Cambridge: Cambridge University Press.

Popkin, Margaret (2000): *Peace Without Justice. Obstacles to Building the Rule of Law in El Salvador*. Pennsylvania: Pennsylvania State University Press

Prunier, Gérard (1995): *The Rwanda Crisis: History of a Genocide*. New York: Columbia University Press

Rawls, John (1971): *A Theory of Justice*. Harvard: Harvard University Press.

Rettberg, Angélica (2005): *Entre el Perdón y el Paredón: Preguntas y Dilemas de la Justicia Transicional*. Ediciones Uniandes, Bogotá: Corcas Editores.

Reychler, Luc and Thania Paffenholz (2001): *Peace-Building: A Field Guide*. London: Lynne Rienner Publishers.

Rosen, Yigal, Daniel Bar-tal and Rafi Nets-Zehngut (2011): “Educación para la Paz en las Sociedades Involucradas en Conflictos Complejos e Insolubles: Objetivos, Condiciones y Direcciones”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro.; Nekane Basabe and Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Rotberg, Robert I. (2000): “Truth Commissions and the Provision of Truth, Justice and Reconciliation”. In *Truth VS Justice: The Morality of Truth Commissions*. Eds: Rotberg, Robert I. and Dennis Thompson. United Kingdom: Princeton University Press.

Rothstein, Robert L. (1999): *After the Peace: Resistance and Reconciliation*. London: Lynne Rienner Publishers

Sesay, Mohamed Gibril and Charlie Hughes. (2006): “Human Rights Assistance to Sierra Leone”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen and Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Sikkink, Kathryn and Carrie Booth Walling. (2007): “The Impact of Human rights trials in Latin America”. In *Journal of Peace Research*, 44(4): 427-445.

Skaar, Elin (1999): “Truth Commission, Trials-or Nothing? Policy Options in Democratic Transitions”. In *Third World Quarterly*, 20 (6): 1109-1128.

The World Bank. (1997): “From Civil War To Civil Society. The Transition From War To Peace in Guatemala and Liberia”. In *The Atlanta Workshop*. Atlanta: The World Bank and the Carter Center.

Turner, John C. (1984): “Social identification and psychological group formation”. In *The social dimension: European developments in social psychology*. Ed: Tajfel, Henri. Cambridge, England: Cambridge University Press.

Turner, John C. (1985): “Social categorization and the self- concept: A social cognitive theory of group behavior”. In *Advances in group processes*. Ed: Lawler, Edward J. Greenwich, CT: JAI Press

Ubillos, Silvia, Carlos Martín Beristain, Maite Garaigordobil and Eran Halperín (2011): “Agresión, Odio, Conflictos Intergrupales y Violencia Colectiva”. In *Superando la Violencia Colectiva y Construyendo Cultura de Paz*. Eds: Páez, Darío, Carlos Martín Beristain, Jose Luis González Castro, Nekane Basabe and Joe de Rivera. Caracas: Editorial Fundamentos.

Uprimmy, Rodrigo and María Paula Saffon (2005): “Estándares Internacional y Procesos de Paz en Colombia. In *Entre el Perdón y el Paredón, Preguntas y Dilemas de Justicia Transicional*. Ed: Rettberg, Angélica. Ediciones Uniandes, Bogotá: Corcas Editores.

Uprimmy, Rodrigo and María Paula Saffon (2006): *Justicia Transicional y Justicia Restaurativa: Tensiones y Complementariedades. ¿Justicia Transicional sin Transición? Verdad, Justicia y Reparación para Colombia*. Bogotá: Ediciones Antropos.

United Nations, Office for Drug Control and Crime Prevention. (1999): *Handbook on Justice for Victims*. New York. Available at <http://www.uncjin.org/Standards/9857854.pdf>

United States Insitute of Peace (USIP). (2011): *Five Rules for Post-Conflict Economic Reconstruction*. Accessed 21 June 2013. Available at <http://inec.usip.org/blog/2011/mar/18/five-rules-post-conflict-economic-reconstruction>

Zeeuv, Jeroen and Luc van de Goor (2006): “Findings and Recommendations”. In *Promoting Democracy in Post-conflict Societies*. Eds: Zeeuv, Jeroen and Krishna Kumar. London: Lynne Rienner Publishers

Zehr, Howard. (2002): *The Little Book of Restorative Justice*. New York: Good Books

Zhu, Ming M. (2008) "Power and Cooperation: Understanding The Road Towards a Truth Commission". In *Buffalo Human Rights Law Review*, 15: 183-200

Zyl, Paul van. (1999) "Dilemmas of Transitional Justice. The Case of South Africa's Truth and Reconciliation Commission". In *Journal of International Affairs*, 52 (2): 647-667.

## ANEX

**TABLE 1:**

**TABLA 1: IMPACTO DE LOS RITUALES DE JUSTICIA TRANSICIONAL (CVR, JUICIOS) EN LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PARA 16 PAÍSES DE AMÉRICA LATINA. PROMEDIOS COMPARADOS DE VARIACIÓN**

| 1.1 Países con CVR, Juicios e Informes Publicados |                            |           |                                  |                      |                                   |  |                     |           |
|---|----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| País  | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos Obtenidos  | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 1.-Argentina                                      | 1983                       | 1983-84   | 1976- 1983                       | Informe público 1985 | 19                                | 4,/(1983)                                    | 2,3                 | 1,7       |
| 2.-Chile  | 1989                       | 1990-1991 | 1973- 1990                       | Informe público 1991 | 15                                | 4/(1986)                                     | 2,8                 | 1,2       |
| 3.-Guatemala                                      | 1994                       | 1997-1999 | 1962- 1996                       | Informe público 1999 | 13                                | 4,4 /(1988)                                  | 4,0                 | 0,4       |
| 4.-Peru   | 1990 y 2000                | 2000-2002 | 1980-2000                        | Informe público 2003 | 8                                 | 4,8/(1990)                                   | 3,9                 | 0,9       |
| 5.-Panama   | 1991                       | 2001-2002 | 1968-1989                        | Informe público 2002 | 11                                | 3/(1991)                                     | 2                   | 1         |
| 6.-El Salvador                                    | 1992                       | 1992-1993 | 1968 -1989                       | Informe público 1993 | 4                                 | 4,6/(1985)                                   | 3                   | 1,6       |
| Variación Promedio                                |                            |           |                                  |                      | 1,13                              |  |                     |           |

Sikkink, K. and Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights in Latin America".



TABLE 2:

| 1.2 Países con CVR disueltas, Informes Limitados, y Juicios. |                            |                |                                  |                                      |                                   |  |                     |           |
|--|----------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| Pais   | Transición a la democracia | Fecha CVR      | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos                  | Duración de los Juicios (en años) | puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 7.-Paraguay  | 1993                       | 2005- 2008     | 1954-2004                        | En proceso                           | 12                                | 3,2' (1989)                                  | 2,6                 | 0,6       |
| 8.- Bolivia  | 1982                       | 1982- 1984     | 1967-1982                        | Sin Informe, Comisión disuelta.      | 2                                 | 4' (1983)                                    | 2,6                 | 1,4       |
| 9.- Ecuador  | 1996                       | 1996 -1997     | 1979-1996                        | Sin Informe, Comisión disuelta.      | 5                                 | 3' (1992)                                    | 2,7                 | 0,3       |
| 10.- Haití   | 1994                       | 1995- 1996     | 1991-1994                        | Informe Limitado, 1996               | 6                                 | 3' (1986)                                    | 3,8                 | -0,8      |
| 11.- Uruguay   | 1984                       | 1985 2000-2001 | 1973-1985                        | Informe Limitado, 1985<br>En proceso | 0                                 | SD.  | SD.                 | SD        |
| Variación Promedio   |                            |                |                                  | 0,37                                 |                                   |  |                     |           |

Sikkink, K. and Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights in Latin America".

TABLE 3:

| 1.3 Países con Juicios pero sin CVR |                            |           |                                  |                     |                                   |  |                     |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| Pais                                | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 11.- Honduras                       | 1982                       | No        |                                  |                     | 9                                 | 3,2 /(1992)                                  | 2,7                 | 0,5       |
| 12.- México <sup>7</sup>            | 1995                       | No        |                                  |                     | 5                                 | 3,2 /(1992)                                  | 3,24                | -0,2      |
| 13.- Nicaragua                      | 1990                       | No        |                                  |                     | 5                                 | 3' (1992)                                    | 2,7                 | 0,3       |
| 14.- Venezuela                      | Sin dictadura              | No        |                                  |                     | 5                                 | 3,2 /(1991)                                  | 3,5                 | -0,3      |
| Variación Promedio                  |                            |           |                                  | 0,075               |                                   |  |                     |           |

Sikkink, K. and Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights in Latin America".

TABLE 4:

| <i>Países sin Juicios y sin CVR</i> |                            |           |                                  |                     |                                   |  |                     |           |
|-------------------------------------|----------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|---------------------|-----------|
| País                                | Transición a la democracia | Fecha CVR | Tiempo cubierto por los Juicios. | Productos obtenidos | Duración de los Juicios (en años) | Puntuación pre-PTS (Fecha del primer juicio) | Puntuación Post PTS | Variación |
| 15.-Brasil                          | 1985                       | No        | 1964-1985                        |                     | 0                                 | 3,2*   | 4,1                 | -0,9      |
| 16.-Guyana                          |                            | No        |                                  |                     | 0                                 | 2,0*   | 1,9                 | 0,1       |
| Variación Promedio                  |                            |           |                                  |                     | -0,4                              |  |                     |           |

Sikkink, K. and Booth- Walling, C. 2007. "The Impact of Human rights in Latin America".